



Asamblea General

Distr. general
13 de agosto de 2020
Español
Original: francés

Consejo de Derechos Humanos

45º período de sesiones

14 de septiembre a 2 de octubre de 2020

Tema 4 de la agenda

**Situaciones de derechos humanos que requieren
la atención del Consejo**

Informe de la Comisión de Investigación sobre Burundi* **

Resumen

Desde mayo de 2019 se han documentado numerosas violaciones graves de los derechos humanos en relación con el proceso electoral de 2020. Los autores de esas violaciones buscaban privar al principal partido de la oposición de cualquier posibilidad de ganar las elecciones. Esas violaciones fueron cometidas principalmente por miembros de la liga juvenil del partido gobernante, los imbonerakure, y por responsables de la administración local, que siguen gozando de una impunidad casi total. Agentes del Servicio Nacional de Inteligencia y de la policía participaron a menudo en esas violaciones y las apoyaron o, en el caso de la policía, permitieron a veces que los autores quedaran impunes. El sistema judicial es también un actor de esta represión.

La investigación sobre los fundamentos económicos del Estado revela que la corrupción y las corrientes financieras ilícitas repercuten negativamente en el disfrute de los derechos humanos en Burundi. Más allá de la transición política en curso, la mayoría de los factores de riesgo siguen estando presentes y se requieren reformas de gran alcance para mejorar la situación a mediano y largo plazo.

* Los anexos del presente documento se reproducen tal como se recibieron, únicamente en el idioma en que se presentaron.

** Se acordó publicar este informe después de la fecha de publicación prevista debido a circunstancias ajenas a la voluntad de quien lo presenta.



Índice

	<i>Página</i>
I. Introducción	3
A. Mandato	3
B. Cooperación de Burundi con la Comisión	3
C. Metodología	3
D. Derecho aplicable	4
II. Principales acontecimientos	4
A. Evolución de la situación en los organismos internacionales y regionales	4
B. Evolución de la situación en Burundi	5
III. Situación de los derechos humanos	7
A. Principales tendencias	7
B. Violaciones en el contexto del proceso electoral	7
C. Otras vulneraciones	11
D. Fundamentos económicos del Estado	13
E. Responsabilidades	16
IV. Delitos contemplados en el derecho internacional	17
A. Elementos constitutivos y tipología de los delitos	17
B. Responsabilidades individuales	17
V. Factores de riesgo	17
VI. Conclusiones y recomendaciones	19
Annexes	
I. Carte du Burundi	22
II. Correspondances avec le Gouvernement du Burundi	23
III. Recommandations antérieures faites par la Commission	32
IV. Indicateurs des facteurs de risque communs identifiés dans le Cadre d'analyse des atrocités criminelles (A/70/741-S/2016/71)	49

I. Introducción

A. Mandato

1. La Comisión de Investigación sobre Burundi fue creada por el Consejo de Derechos Humanos mediante su resolución 33/24, de 30 de septiembre de 2016, para realizar una investigación exhaustiva sobre las violaciones y vulneraciones de los derechos humanos cometidas en Burundi desde abril de 2015, determinar si algunas de ellas podrían constituir delitos contemplados en el derecho internacional, identificar a sus presuntos autores y recomendar medidas para garantizar que esas personas rindieran cuentas de sus actos. Este mandato se ha prorrogado por tres períodos adicionales de un año. En su resolución 42/26, aprobada el 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos también encomendó a la Comisión que siguiera investigando, entre otras cosas, el respeto y el disfrute de los derechos políticos, civiles, económicos y sociales en el contexto electoral, en particular en lo que respecta a los fundamentos económicos del Estado.

2. La composición de la Comisión no ha variado: Doudou Diène (Senegal), Presidente de la Comisión desde el 1 de febrero de 2018, Lucy Asuagbor (Camerún), miembro de la Comisión desde el 5 de marzo de 2018, y Françoise Hampson (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), designada el 22 de noviembre de 2016.

3. La Comisión se centró en las violaciones y vulneraciones cometidas desde mayo de 2019 y prestó especial atención a las relacionadas con el proceso electoral de mayo de 2020¹, así como a las violaciones de los derechos del niño cometidas desde 2015. En el marco de su investigación sobre los fundamentos económicos del Estado burundés, la Comisión trató de identificar las prácticas de la economía burundesa que favorecen las violaciones de los derechos humanos. En el marco de su análisis de los factores de riesgo, ha identificado los que deben tenerse en cuenta en el contexto de la actual transición política.

4. En 2020, la Comisión hizo dos presentaciones orales ante el Consejo de Derechos Humanos. En el presente informe se resumen las conclusiones finales de sus investigaciones, que se detallarán en un documento adicional².

B. Cooperación de Burundi con la Comisión

5. El Consejo de Derechos Humanos reiteró su petición al Gobierno de Burundi de que cooperara plenamente con la Comisión, le permitiera visitar el país y le facilitara toda la información necesaria para el cumplimiento de su mandato. La Comisión trató de entablar un diálogo con las autoridades de Burundi por conducto de la Misión Permanente de la República de Burundi ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, en particular para permitir un intercambio de información y reflejar en su informe en la medida de lo posible la posición del Gobierno de Burundi. Toda la correspondencia de la Comisión quedó sin respuesta.

C. Metodología

6. La Comisión realizó visitas a Rwanda, Uganda y la República Unida de Tanzania. Los miembros de la Comisión también se reunieron con representantes de la Unión Africana, la Unión Europea y diversos Estados. Sin embargo, la crisis sanitaria vinculada a la pandemia de coronavirus (COVID-19) y las restricciones de circulación impuestas por muchos Estados a partir de marzo de 2020 impidieron que la Comisión realizara algunas de

¹ La información relativa a las elecciones en los distritos de las colinas del 24 de agosto de 2020 solo figura en el documento adicional A/HRC/45/CRP.1, que puede consultarse en el sitio web de la Comisión.

² A/HRC/45/CRP.1.

las visitas previstas. En un esfuerzo por adaptarse lo mejor posible a las nuevas limitaciones, la Comisión ha realizado un mayor número de entrevistas a distancia. En total, durante el cuarto período de su mandato se realizaron más de 300 entrevistas presenciales o a distancia con víctimas, testigos y otras fuentes, tanto residentes en Burundi como en terceros países, que se añaden a los casi 1.300 testimonios recogidos desde el comienzo de su labor. La Comisión deplora que las personas que han colaborado con la Comisión hayan debido hacer frente a actos de intimidación o represalias.

7. La Comisión mantuvo la misma metodología y el mismo criterio de prueba, a saber, la existencia de “motivos razonables para creer”, que son perfectamente acordes con las directrices y las prácticas reconocidas internacionalmente para este tipo de investigación³.

D. Derecho aplicable

8. El derecho aplicable es el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional⁴. Dado que Burundi no ha ratificado ningún nuevo tratado, el país es parte en los mismos instrumentos que antes.

9. La retirada de Burundi del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, efectivo a partir del 27 de octubre de 2017, no exime al país de las obligaciones que le incumbían mientras era parte en ese tratado⁵ ni de sus obligaciones en virtud del derecho internacional consuetudinario en materia de delitos internacionales. La Comisión remite a las definiciones de los delitos establecidas en el Estatuto de Roma, que se recogen en el Código Penal de Burundi.

II. Principales acontecimientos

A. Evolución de la situación en los organismos internacionales y regionales

10. Durante el período que abarca el presente informe, ningún relator especial ni grupo de trabajo visitó Burundi, y no se planificó ninguna visita. Los titulares de mandatos de los procedimientos especiales enviaron una comunicación al Gobierno en relación con un caso de presunta violación de los derechos humanos⁶, a la que el Gobierno no respondió. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria aprobó dos opiniones en las que concluyó que Germain Rukuki (un defensor de los derechos humanos) y Alexis Sebahene (un militar en detención preventiva desde agosto de 2015) estaban detenidos arbitrariamente⁷.

11. El Consejo de Seguridad celebró el 30 de octubre de 2019 una sesión oficial para examinar la situación en Burundi, durante la cual el Enviado Especial del Secretario General para Burundi, Sr. Kafando, anunció su dimisión. Desde entonces, el Consejo de Seguridad solo ha podido celebrar dos reuniones informales de diálogo a puerta cerrada, en febrero y junio de 2020.

12. Las sanciones selectivas decididas por la Unión Europea contra cuatro nacionales de Burundi responsables de la represión violenta de 2015, entre ellos Gervais Ndirakobuca, que el 28 de junio de 2020 fue nombrado Ministro del Interior, Desarrollo Comunitario y Seguridad Pública, se han renovado hasta octubre de 2020. Varios países no pertenecientes a la UE se han alineado con esta decisión. Las sanciones decididas por los Estados Unidos

³ Véase Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *Comisiones de investigación y misiones de determinación de los hechos en derechos humanos y derecho internacional humanitario: guía y práctica*, documento HR/PUB/14/7.

⁴ A/HRC/36/54 y Corr.1, párrs. 9 a 11. Véase también A/HRC/36/CRP.1, párrs. 37 a 50 (documento disponible en el sitio web de la Comisión).

⁵ Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (17 de julio de 1998), art. 127.

⁶ JAL BDI 1/2020.

⁷ A/HRC/WGAD/2019/37 y A/HRC/WGAD/2020/25.

de América se mantienen contra 11 nacionales de Burundi, entre ellos Alain-Guillaume Bunyoni, Primer Ministro desde el 24 de junio de 2020, y Gervais Ndirakobuca.

13. Sigue su curso la investigación iniciada el 25 de octubre de 2017 por el Fiscal de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Burundi entre el 26 de abril de 2015 y el 26 de octubre de 2017.

B. Evolución de la situación en Burundi

1. Proceso electoral

14. Las elecciones presidenciales, legislativas y comunales se celebraron el 20 de mayo de 2020 de conformidad con el calendario establecido por la Comisión Electoral Nacional Independiente. La campaña electoral oficial para la triple cita electoral del 20 de mayo se abrió el 27 de abril y se cerró el 17 de mayo. Según el Código Electoral, los candidatos y los partidos políticos solo podían hacer campaña durante este período, entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde.

15. La campaña electoral y los comicios tuvieron lugar sin observadores internacionales. Los que iban a ser enviados por la Comunidad de África Oriental renunciaron a ir tras el anuncio del Gobierno de Burundi de que, en el marco de la lucha contra la COVID-19, a su llegada serían mantenidos en cuarentena sanitaria durante catorce días, es decir, hasta el día después de las elecciones.

16. El 25 de mayo de 2020 el Presidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente anunció los resultados provisionales de las elecciones, en las que Évariste Ndayishimiye ganó las elecciones presidenciales con más del 68 % de los votos y Agathon Rwasa quedó en segundo lugar con el 20 % de los votos. En un comunicado publicado el 27 de mayo, la Conferencia de Obispos Católicos de Burundi dijo que sus 2.716 observadores desplegados en los colegios electorales seleccionados habían informado de “muchas irregularidades”, tanto que los obispos se preguntaban “si podrían ser perjudiciales para el resultado que se proclamara”⁸.

17. El 4 de junio de 2020, el Tribunal Constitucional desestimó la demanda del Congreso Nacional para la Libertad (CNL) en la que se impugnaban los resultados provisionales y se denunciaban fraudes e irregularidades masivos. El Tribunal anunció que Évariste Ndayishimiye había sido elegido con el 68,7 % de los votos. Agathon Rwasa, que al mismo tiempo fue elegido miembro del Parlamento, declaró que tomaba nota de esa decisión. El partido gobernante, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD) también ganó las elecciones legislativas y comunales por un amplio margen.

18. El 8 de junio de 2020 el todavía presidente en funciones Pierre Nkurunziza murió inesperadamente, oficialmente de un paro cardíaco. El 12 de junio el Tribunal Constitucional declaró que el recién elegido Presidente Évariste Ndayishimiye debía prestar juramento inmediatamente, lo cual tuvo lugar el 18 de junio. En su discurso de investidura, que no estuvo exento de ambigüedades y contradicciones, prometió reconciliar el país mediante el diálogo, luchar contra la impunidad, mejorar la situación de los derechos humanos y proteger a la población. También pidió a los refugiados que regresaran al país. Sin embargo, puso en duda la realidad de la crisis política de 2015 y mostró una concepción indebidamente restringida de ciertas libertades públicas, supuestamente a causa de la cultura burundesa.

19. El 24 de junio de 2020, Alain-Guillaume Bunyoni, Ministro de Seguridad Pública desde 2015, fue nombrado Primer Ministro, y Prosper Bazombanza, de la Unión para el Progreso Nacional, fue nombrado Vicepresidente. El Jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de Nkurunziza fue confirmado en sus funciones, al igual que su portavoz. El 28 de junio se formó un nuevo Gobierno de 15 miembros, entre ellos 5 mujeres, compuesto principalmente por personalidades del régimen anterior que representaban el ala

⁸ Véase www.egliscatholique.bi/index.php/fr/vie-de-l-eglise1/communiqués/communiqué-de-la-conference-des-eveques-catholiques-du-burundi-sur-le-scrutin-du-20-mai-2020.

dura del CNDD-FDD. Desde entonces, docenas de militares han sido ascendidos, incluidos algunos oficiales de alto rango citados regularmente por su participación en graves violaciones de los derechos humanos desde 2015. El 10 de julio el Senado dio su aprobación a los 18 gobernadores provinciales elegidos por el Presidente, entre los que figuraban 3 mujeres y 6 militares de alto rango, rompiendo con la práctica de nombrar a civiles para estos puestos clave.

20. El 20 de julio de 2020 el CNDD-FDD obtuvo 34 escaños senatoriales de los 36 elegidos por los consejeros comunales⁹.

2. Incidentes de seguridad

21. Burundi ha sufrido varios incidentes graves de seguridad. El 22 de octubre de 2019 se produjo un enfrentamiento armado en la provincia de Bubanza entre las fuerzas de defensa y seguridad de Burundi y un grupo armado, que fue reivindicado por el grupo de oposición Red Tabara. El 16 de noviembre de 2019, en la provincia de Cibitoke, una posición militar del ejército de Burundi fue atacada por un grupo de personas fuertemente armadas. El Gobierno de Burundi acusó a Rwanda de ser responsable del ataque, lo que Rwanda niega formalmente. Entre el 19 y el 23 de febrero de 2020, en la provincia de Bujumbura, se informó de la presencia de un grupo armado y de varios intercambios de disparos con las fuerzas del orden. El balance oficial de este incidente arroja en particular 22 criminales armados, 2 policías muertos y otros 6 asaltantes capturados. Sin embargo, varios de esos hombres armados fueron fusilados después de haber sido capturados por las fuerzas de seguridad apoyadas por los imbonerakure.

3. Justicia de transición

22. El 14 de enero de 2020, el Presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación presentó el informe sobre la marcha de los trabajos de 2019. Esa Comisión identificó 142.505 burundeses muertos o desaparecidos desde el acceso a la independencia en 1962 hasta el final de la guerra civil en diciembre de 2008. Al parecer, dispone de información sobre las condiciones en que esas personas fueron asesinadas o desaparecidas y sobre los autores de esos actos. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación también ha localizado miles de fosas comunes en todas las provincias. Desde principios de 2020, ha multiplicado las excavaciones y ha exhumado miles de restos humanos. Las ropas de estas víctimas y el material utilizado para matarlas —principalmente en 1972, cuando las víctimas fueron en su mayoría hutus— se conservarán en un museo¹⁰.

4. Situación sanitaria

23. Burundi se ha enfrentado a una epidemia de cólera desde junio de 2019, a un “brote” de paludismo a escala epidémica desde enero de 2019 y a la pandemia de COVID-19 desde marzo de 2020, y ha tenido que prepararse para una posible epidemia de la enfermedad del Ébola, que circula en la República Democrática del Congo desde 2018.

24. Durante meses, el Gobierno de Burundi negó la realidad y la gravedad de la situación sanitaria del país, rechazando por ejemplo calificar como epidemia el “brote” de paludismo o reconocer la existencia del brote de COVID-19, ya que, según declaraciones del ex Presidente Nkurunziza, Burundi estaba protegido contra ello “por la gracia de Dios”. El 12 de mayo de 2020, en plena pandemia, el Gobierno declaró persona non grata a cuatro funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, entre ellos su representante en el país. Burundi fue uno de los pocos países con casos positivos de COVID-19 que no adoptó ninguna restricción a las reuniones multitudinarias, que por el contrario se multiplicaron durante la campaña electoral. Según los datos oficiales de Burundi, al 20 de julio de 2020, de un total de 9.461 pruebas realizadas, se detectaron 328 casos de COVID-19, pero solo se informó de una muerte. Estas cifras han sido denunciadas regularmente como poco realistas.

⁹ Tres senadores twa fueron cooptados.

¹⁰ Véase www.ppbdi.com/index.php/ubum/imibano/9-actualite/15519-parlement-presentation-du-rapport-annuel-des-activites-de-la-commission-verite-et-reconciliation.

25. Desde el fallecimiento del Presidente Nkurunziza el 8 de junio de 2020, las autoridades han insistido en la necesidad de adoptar medidas de protección y han alentado a las personas a visitar los centros de salud en caso de que aparezcan síntomas, aunque sigue faltando información sobre la verdadera magnitud de la pandemia. En su discurso del 30 de junio de 2020 el Presidente Ndayishimiye declaró que la pandemia de COVID-19 representaba “el mayor enemigo” del pueblo de Burundi.

5. Situación humanitaria

26. Al 30 de junio de 2020, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 333.703 burundeses todavía estaban refugiados en los países vecinos, 6.423 habían sido repatriados de la República Unida de Tanzania desde el 1 de enero de 2020 y 3.247 recién llegados se habían registrado oficialmente en los países vecinos.

27. En 2020, según las cifras acordadas por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y el Gobierno de Burundi, 1,7 millones de personas necesitan asistencia humanitaria y 1,7 millones están en situación de inseguridad alimentaria. Aproximadamente 100.000 personas siguen estando desplazadas internamente, de las cuales la mayoría son mujeres que son cabeza de hogar en situación de vulnerabilidad económica¹¹.

III. Situación de los derechos humanos

A. Principales tendencias

28. En el contexto del proceso electoral de 2020, que comenzó en 2019, las violaciones de los derechos humanos han tenido una dimensión política y afectado sobre todo al derecho a la seguridad y la libertad, aunque también al derecho a la vida y a no ser sometido a torturas ni malos tratos, así como a las libertades públicas. Las principales víctimas fueron los partidos políticos de la oposición y sus miembros, así como periodistas y medios de comunicación independientes. Se produjeron violentos enfrentamientos entre miembros del partido gobernante y del CNL, pero no hubo violencia masiva, gracias en parte a los llamamientos a la calma y a los recordatorios de la responsabilidad en que incurrían los líderes políticos por los actos de sus militantes, emitidos por la comunidad internacional, incluida la Comisión.

29. Los autores de estas violaciones de los derechos humanos son principalmente imbonerakure y responsables administrativos locales, que actúan solos o conjuntamente con la policía o el Servicio Nacional de Inteligencia. En los casos de arresto y detención arbitrarios, la responsabilidad recae principalmente en los agentes de la policía y del Servicio Nacional de Inteligencia, pero también en el personal judicial.

30. La gran mayoría de las víctimas se han visto privadas de su derecho a un recurso efectivo debido a la falta de independencia e imparcialidad del sistema judicial, que sigue afectado por altos niveles de corrupción. El sistema judicial seguía siendo un instrumento de represión contra la oposición política y también se utilizaba para censurar la prensa y a los defensores de los derechos humanos.

B. Violaciones en el contexto del proceso electoral

1. Una oposición política debilitada

31. Los partidos políticos de la oposición y sus miembros, principalmente el CNL, considerado el principal rival del partido gobernante, fueron víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, que se intensificaron al aproximarse la fecha de las elecciones. El

¹¹ Véase Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “Burundi: informe de situación”, actualizado el 21 de julio de 2020. Puede consultarse en: <https://reports.unocha.org/fr/country/burundi/>.

objetivo era debilitar o incluso eliminar las posibilidades de que el CNL ganara las elecciones, impidiéndole que realizara ciertas actividades políticas, incluida la campaña electoral, intimidando a sus miembros, candidatos y representantes para disuadirlos de llevar a cabo sus tareas, e incluso destruyendo las propiedades y las cosechas de algunos de sus miembros. El día de las elecciones, el objetivo de esos actos era impedir que ciertos opositores votaran de manera libre y secreta, e impedir que los representantes designados por los partidos de la oposición observaran el desarrollo de la votación. Los candidatos independientes y los candidatos de otros partidos fueron más raramente blanco de los ataques, lo que atestigua el carácter organizado y específico de estos actos.

Derecho a la libertad

32. Decenas de activistas del CNL, incluidos los que ocupaban puestos de responsabilidad en el partido y los candidatos a las elecciones legislativas y comunales, fueron arrestados y detenidos arbitrariamente, por ejemplo por haber hecho campaña fuera de los días y horas oficiales, por llevar una gorra o un símbolo del CNL, celebrado reuniones ilegales o intentado “perturbar las elecciones”. Algunos fueron arrestados después de enfrentamientos físicos con imbonerakure que quería interrumpir los mítines electorales. Aunque la mayoría de ellos fueron puestos en libertad al cabo de unos pocos días o semanas, algunos otros fueron condenados a penas relativamente severas de varios años de prisión después de juicios acelerados organizados de manera flagrante, mientras que otros permanecieron en prisión preventiva.

33. El sistema judicial siguió siendo un instrumento privilegiado de represión política y demostró parcialidad a favor del CNDD-FDD. Los imbonerakure involucrados en enfrentamientos con miembros del CNL rara vez han sido procesados o sancionados. El Ministerio de Seguridad Pública ha designado sistemáticamente a los miembros del CNL como responsables en el “90 %” de estos incidentes, sin molestarse en hacer investigaciones.

Derecho a la vida y a la integridad física

34. Varios miembros del CNL fueron deliberadamente asesinados en represalia por su compromiso político. Durante los violentos enfrentamientos entre imbonerakure y miembros del CNL, hubo heridos y muertos en ambos campos. Los imbonerakure también agredieron a golpes a militantes del CNL aisladamente o en pequeños grupos; algunas víctimas resultaron gravemente heridas y algunos de estos incidentes constituyen una forma de tortura.

Derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos

35. Los actos encaminados a impedir que ciertos candidatos de los partidos de la oposición se presenten a las elecciones han adoptado diversas formas. Además de las amenazas, la violencia física y el arresto y la detención arbitrarios, las autoridades han abusado de los medios legales para impedir que se presenten.

36. La Comisión Electoral Nacional Independiente rechazó las solicitudes de 4 de los 10 candidatos que se presentaron a las elecciones presidenciales y de varias listas de partidos de la oposición para las elecciones legislativas en algunas provincias, principalmente por la ausencia o la invalidez de documentos que demostraran el respeto del equilibrio étnico y de género, sin darles sin embargo la oportunidad de corregir esas deficiencias. En general, el Tribunal Constitucional validó esas decisiones, con algunas excepciones.

37. El 18 de mayo de 2020 el Fiscal General de la República pidió a la Comisión Electoral Nacional Independiente que eliminara de las listas para las elecciones legislativas y comunales a 59 candidatos del CNL porque esas personas estaban siendo investigadas por la justicia, algunas de ellas estaban en detención preventiva y otras eran objeto de una orden oficial de búsqueda. El 19 de mayo, el Presidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente transmitió los nombres de esas personas a los responsables de las comisiones electorales provinciales independientes. En efecto, según el Código Electoral, las personas en detención preventiva pierden temporalmente su condición de elector y, por ello, no

pueden ser candidatas en las elecciones legislativas y comunales¹². Esas disposiciones no solo son incompatibles con el derecho a la presunción de inocencia, sino que, combinadas con la detención arbitraria y masiva de los candidatos del CNL, constituyen una restricción abusiva del derecho a presentarse a las elecciones.

Libertad de asociación y de reunión pacífica

38. Antes de que se iniciara la campaña electoral, los responsables de las administraciones locales impusieron restricciones arbitrarias al CNL para la apertura de determinadas oficinas o su inauguración, así como para realizar actividades legítimas como la organización de reuniones privadas o públicas. Decenas de oficinas del CNL fueron objeto de actos de vandalismo o destruidas parcial o totalmente, pero las detenciones que siguieron a estos hechos se dirigieron principalmente contra sus propios miembros, a los que se acusó de querer perjudicar de esta manera al partido gobernante.

39. Durante la campaña electoral, todos los partidos políticos que se presentaban a las elecciones organizaron numerosos mítines en todo el país. Aunque en general la mayoría de ellos se realizaron sin problemas, varios mítines del CNL se interrumpieron u obstaculizaron. Los imbonerakure, a menudo con el apoyo de responsables administrativos locales, trataron de impedir la celebración de algunos de ellos ocupando los terrenos en los que estaba previsto que tuvieran lugar y que habían sido declarados previamente a las autoridades locales.

Libertad de expresión

40. En las redes sociales circularon mensajes especialmente virulentos de odio y hostilidad hacia los opositores políticos del CNDD-FDD, a veces con una dimensión étnica, sin que las autoridades los condenaran o sancionaran. El jefe del CNL era presentado regularmente por los responsables del CNDD-FDD como el aliado de los “enemigos del país” y de los “colonos”, o como la “marioneta” del ex Presidente de la República Pierre Buyoya. Esos comentarios divisivos fomentaron e incluso legitimaron la hostilidad hacia los miembros del CNL. Además, algunos candidatos del CNL fueron detenidos y enjuiciados por el simple hecho de haber criticado a responsables administrativos locales o a autoridades y sus actos.

2. Observadores independientes silenciados

Prensa

41. Los periodistas fueron intimidados y amenazados, incluso de muerte, para impedirles que hicieran su trabajo de forma independiente o que cubrieran cuestiones sensibles. Algunos se vieron obligados a pedir permiso a las autoridades administrativas locales para viajar, especialmente por el interior del país. El caso de los cuatro periodistas del grupo de prensa independiente Iwacu es emblemático en este sentido. El 30 de enero de 2020 fueron condenados a dos años y medio de prisión por “intento fallido de complicidad para atentar contra la seguridad interior del Estado”, en aplicación de los artículos 16 y 607 a 626 del Código Penal, por haber ido a cubrir el 22 de octubre de 2019 un enfrentamiento armado que se había señalado entre militares burundeses y un grupo armado. Fueron detenidos inmediatamente nada más llegar a ese lugar. Su condena ha sido denunciada por varios expertos independientes de las Naciones Unidas¹³. Sin embargo, el 5 de junio de 2020 el Tribunal de Apelación de Ntahangwa confirmó ese veredicto.

42. La prensa siguió estando estrechamente vigilada por el Consejo Nacional de Comunicaciones. En octubre de 2019, este Consejo presentó el “Código de conducta para los medios de comunicación y los periodistas en el período electoral de 2020”, que obliga a los medios de comunicación a trabajar en sinergia y les prohíbe informar sobre resultados distintos de los anunciados oficialmente por la Comisión Electoral Nacional Independiente

¹² República de Burundi, Ley Orgánica núm. 1/11 de 20 de mayo de 2019 por la que se modifica la Ley núm. 1/20 de 3 de junio de 2014 relativa al Código Electoral, arts. 5.1, 125 a) y 183 f).

¹³ Véase <https://news.un.org/fr/story/2020/02/1062201>.

o utilizar las encuestas como fuente de información. Los medios de comunicación independientes han denunciado el hecho de que ese código fue elaborado por el Consejo Nacional de Comunicaciones sin consultar a los profesionales y que restringe de hecho la libertad de prensa.

Defensores de los derechos humanos y organizaciones no gubernamentales

43. El Gobierno ha seguido instrumentalizando el sistema judicial para amordazar a la sociedad civil. Por ejemplo, el 4 de febrero de 2020 comenzó el juicio de una veintena de defensores de los derechos humanos y periodistas exiliados que se oponían a un tercer mandato del Presidente Nkurunziza, en ausencia de los acusados y sin que estos pudieran ser representados por abogados. Los defensores de los derechos humanos siguen siendo detenidos arbitrariamente, entre ellos Germain Rukuki y Nestor Nibitanga, que fueron condenados a 32 y 5 años de prisión, respectivamente.

44. Como consecuencia de las medidas adoptadas en 2018 para aumentar el control sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras y sus actividades, en febrero de 2020 se ordenó a esas ONG que presentaran una lista de sus empleados en la que figurara en particular su origen étnico. El 20 de marzo de 2020 el Gobierno anunció que las que no respetaran el equilibrio étnico serían “suprimidas” y que se realizarían inspecciones.

3. Población bajo control

45. El control de la población por los imbonerakure, a menudo basado en actos de intimidación, incluidos reclutamientos forzosos en el seno del CNDD-FDD, se ha acentuado en los últimos años. En el contexto del proceso electoral, estas prácticas continuaron aunque dirigidas más bien contra los miembros del CLN.

46. La omnipresencia de los imbonerakure en las colinas y en los comités mixtos de seguridad es motivo de preocupación incluso dentro del Gobierno. El Secretario Permanente del Consejo de Seguridad Nacional recordó que los comités mixtos no debían sustituir a la policía ni a la justicia, que no debían organizar patrullas nocturnas en ausencia de representantes de las fuerzas de policía y, sobre todo, que debían ser más inclusivos a fin de inspirar mayor confianza. El 3 de marzo de 2020, el Ministro del Interior pidió que se suspendieran hasta el comienzo de la campaña electoral las marchas organizadas por los jóvenes afiliados a los partidos políticos en las que se cantaban canciones y se gritaban consignas.

47. Estas declaraciones tuvieron un efecto limitado, ya que fueron tardías y contradecían instrucciones anteriores. El 15 de enero de 2020, el Secretario Permanente del Consejo de Seguridad Nacional se había hecho referido a la necesidad de revitalizar los comités mixtos y de “controlar el flujo de los movimientos de la población y de los viajeros y saber día a día qué extranjeros se alojan en cada casa y en cada hotel”.

48. Parte de la población siguió siendo obligada por los imbonerakure y los responsables administrativos locales a hacer contribuciones en efectivo o en especie, entre otras cosas para apoyar al CNDD-FDD, organizar mítines políticos o hacer regalos a su candidato designado.

49. A algunas personas se les impidió participar en las manifestaciones organizadas por el CNL, en particular por falta de transporte, mientras que otras se vieron obligadas a participar en las organizadas por el CNDD-FDD, ya que los mercados fueron cerrados para la ocasión. Algunos votantes no tuvieron más remedio que votar a favor del partido gobernante en las distintas elecciones porque no pudieron votar en secreto o fueron intimidados.

50. Se obligó a los niños a participar en mítines políticos organizados por el CNDD-FDD, ya que sus clases han sido suspendidas. Los directores de las escuelas amenazaron con bajar la nota de “Educación” a los estudiantes que no participasen en esos mítines. El día de la votación, los estudiantes, incluidos menores, fueron obligados a votar por los responsables administrativos locales o los directores de las escuelas, que les entregaron tarjetas de electores fallecidos o exiliados.

51. El proceso electoral tuvo lugar en un momento en que la pandemia de COVID-19 fue subestimada e incluso instrumentalizada con fines electorales por las autoridades de Burundi. Esas autoridades insistieron en organizar las elecciones sin tomar las medidas adecuadas para proteger a la población. Alentaron a la gente a participar en los mítines electorales masivos del CNDD-FDD y se negaron a comunicar de manera transparente el alcance de la pandemia o los riesgos que conllevaba. Incluso amenazaron con castigar a quienes se anticiparan a tomar medidas de protección. Las personas enfermas tuvieron miedo de buscar atención médica o hacerse las pruebas de detección. Ello constituye una violación del derecho a la salud e incluso del derecho a la vida.

4. Las mujeres en el proceso electoral

52. En 2020 las mujeres constituyen el 52 % de los electores en Burundi. El sistema de cuotas de género del 30 % previsto en la Constitución y puesto en práctica en el Código Electoral mediante un mecanismo de cooptación y listas bloqueadas ha permitido que Burundi se sitúe en el promedio alto en cuanto a la representación de la mujer en las instituciones nacionales constituidas mediante elección y descentralizadas de África¹⁴, con, por ejemplo, un 39 % de mujeres en la Asamblea Nacional y un 41 % en el Senado. De acuerdo con la cuota constitucional, el Gobierno del Presidente Ndayishimiye incluye 5 mujeres entre los 15 ministros. Sin embargo, en promedio, solo entre el 12 % y el 18 % de las mujeres han sido nombradas o elegidas para instituciones en las que no existen cuotas de género, como las gobernaciones provinciales o los consejos de los distritos de las colinas. Esta situación demuestra la importancia de las medidas especiales para acelerar el logro de la igualdad de hecho entre hombres y mujeres en Burundi.

53. En el contexto del proceso electoral, las mujeres miembros de los partidos de la oposición fueron víctimas de arrestos y detenciones arbitrarias, pero también de intimidaciones y amenazas, en particular cuando se publicaron las listas electorales. Estos actos tenían por objeto disuadirlas de participar activamente en el proceso electoral o impedir el ejercicio de sus libertades civiles.

54. La violencia electoral que sufren las mujeres es diferente de la que afecta a los hombres, en el sentido de que está intrínsecamente basada en el género¹⁵ y vinculada también a la preservación de los papeles tradicionales del hombre y la mujer y a las desigualdades estructurales entre los sexos¹⁶. Las mujeres burundesas que participan en la política se enfrentan a múltiples discriminaciones derivadas de la percepción de que la actividad política es difícilmente compatible con su papel de esposas y madres. Estos prejuicios, que constituyen barreras al ejercicio de sus libertades fundamentales, existen tanto en la esfera privada como en los partidos políticos. El clima general de intolerancia hacia la oposición política agrava las dificultades y la violencia que sufren las mujeres que desempeñan funciones en la oposición.

55. La Comisión no pudo documentar la violencia sexual directamente relacionada con el proceso electoral, sobre todo por falta de tiempo. De hecho, el trauma y el estigma que conlleva esa violencia disuade a menudo a las víctimas de denunciarla inmediatamente. No obstante, la Comisión ha seguido documentando casos de violencia sexual cometidos, entre otras cosas, por razones políticas, como se informa en el párrafo 58 del presente documento.

C. Otras vulneraciones

56. La Comisión tuvo que llevar a cabo sus investigaciones en circunstancias excepcionales debido a la pandemia de COVID-19. Tuvo que cancelar varias misiones a países fronterizos con Burundi. Además, dio prioridad a la investigación sobre las violaciones cometidas en el contexto electoral y sobre los fundamentos económicos

¹⁴ Véase Comisión Económica para África, *Les femmes dans les sphères décisionnelles en Afrique*, folleto informativo, junio de 2019.

¹⁵ A/73/301, párr. 33.

¹⁶ *Ibid.*, párr. 13.

del Estado, de conformidad con su mandato. En consecuencia, no pudo reunir pruebas suficientes para corroborar ciertas denuncias de violaciones de los derechos económicos y sociales, como los derechos a un nivel de vida adecuado, al trabajo o a la educación, ni pronunciarse sobre la evolución de ciertas tendencias documentadas en su informe anterior (A/HRC/42/49).

1. Derecho a la vida

57. Algunas personas con un perfil determinado, como cambistas y ex-FAB (soldados del antiguo ejército de Burundi), fueron encontradas muertas unos días después de su desaparición, con señales evidentes de que habían sido ejecutadas. La policía también llevó a cabo operaciones en las que se ejecutaba sumariamente a las personas en lugar de aprehenderlas. Se siguen encontrando regularmente en los espacios públicos cadáveres con señales de muerte violenta, sin que las autoridades hagan ningún intento de establecer su identidad o las circunstancias de la muerte. Recientemente, dos policías fueron condenados a penas ejemplares por haber matado a civiles con su arma de servicio. Este es un primer paso positivo en la lucha contra la impunidad policial.

2. Tortura y violencia sexual

58. Se siguieron cometiendo actos de tortura, incluida en forma de violencia sexual y basada en el género que afectaba principalmente a mujeres y niñas, pero también a hombres. Esa violencia tenía por objeto intimidar, controlar, reprimir o castigar a las mujeres y los hombres por sus opiniones políticas supuestas o reales, su negativa a adherirse al partido gobernante o sus vínculos con un movimiento armado. Se trata fundamentalmente de casos de violación en grupo, pero también de golpes o quemaduras en los genitales, las nalgas o los senos, y casos de desnudez forzada. Esa violencia fue cometida principalmente por imbonerakure o miembros de la policía, durante visitas o ataques a los domicilios de las víctimas, pero también en el contexto de arrestos y detenciones bajo la responsabilidad del Servicio Nacional de Inteligencia. Algunas mujeres fueron violadas después de su repatriación a Burundi.

59. La Comisión expresa preocupación por el carácter estructural de la violencia sexual en Burundi, ya que los testimonios recogidos desde 2015 demuestran la persistencia de este tipo de violencia y confirman las tendencias identificadas en sus informes anteriores. A pesar de los diversos programas destinados a facilitar el acceso a la justicia de los más vulnerables, en particular las mujeres, y de que ha mejorado el tratamiento judicial de los casos de violencia de género¹⁷, la mayoría de las víctimas de violencia sexual han sido amenazadas directa o indirectamente y no se han atrevido a denunciar a sus autores ni a pedir ayuda. Ello se debe en particular al elevado número de autores de esos actos que son miembros de las fuerzas de seguridad o imbonerakure, que siguen gozando de una impunidad casi total.

3. Repatriados

60. Algunas personas repatriadas siguieron enfrentándose a la hostilidad de los responsables administrativos locales y de los imbonerakure, que los intimidaron y amenazaron y les quitaron las provisiones que tenían para el regreso. En algunos casos, los repatriados fueron víctimas de graves violaciones que los obligaron a regresar al exilio.

4. Derechos del niño

61. Desde el comienzo de la crisis en 2015, los niños han sido regularmente víctimas de violaciones de los derechos humanos, entre ellos sus derechos a la libertad, la seguridad y la integridad física, ya que han sido víctimas en particular de la violencia sexual, así como de vulneraciones de su libertad de opinión y de asociación mediante el reclutamiento forzoso en los imbonerakure o, en el caso de los niños más pequeños, en la agrupación de los “aguiluchos” del CNDD-FDD.

¹⁷ República de Burundi, *Rapport national d'évaluation de la mise en application de la Déclaration et du Programme d'actions de Beijing*, mayo de 2019, págs. 13 y 32.

62. Los niños de Burundi, especialmente las niñas, han sufrido los efectos de esta crisis política, ya que se han visto gravemente afectados por las violaciones sufridas por sus padres u otros miembros de la familia. Algunos padres han perdido los medios para mantener a sus familias porque tuvieron que huir del país. La desaparición o el asesinato de un miembro de la familia, especialmente del padre, también ha privado a las familias de su capacidad para atender las necesidades básicas de los niños.

63. Las familias han sido separadas como resultado de estas violaciones, por ejemplo cuando huyen al extranjero, y muchos niños han quedado huérfanos. Así, más de la mitad de los refugiados de Burundi son niños, un número importante de los cuales no están acompañados¹⁸. Muchos niños y niñas han quedado traumatizados por las graves violaciones sufridas por un miembro de la familia, de las que a menudo han sido testigos. Muchos de ellos necesitan atención psicosocial e incluso médica.

D. Fundamentos económicos del Estado

64. La corrupción, la malversación de fondos públicos —incluidos los de la asistencia internacional para el desarrollo—, los conflictos de interés y la obtención ilegal de intereses están en la base del funcionamiento de la economía burundesa, especialmente en los sectores más lucrativos como la minería o la contratación pública, aunque la mayoría de esos comportamientos constituyen crímenes o delitos con arreglo a la legislación de Burundi.

65. La concepción patrimonial del poder en Burundi es antigua y se deriva del problema estructural de compartir los recursos vinculado a la debilidad de la economía, en particular los medios de producción industrial, así como a la escasez de tierras. Únicamente la obtención del poder acceso o la proximidad con éste permite acceder a los recursos¹⁹, entre otras mediante prácticas económicas y financieras ilícitas. Esta es una de las causas fundamentales de las violaciones de los derechos humanos en Burundi, ya que los autores tratan de eliminar toda oposición política a fin de garantizar que una minoría permanezca en el poder y tenga acceso a la riqueza. Mientras persistan tales prácticas, no habrá ningún incentivo para reformar a fondo el sistema a fin de respetar y proteger los derechos humanos y combatir la corrupción, sino todo lo contrario.

66. Los efectos de esa malversación económica son preocupantes en vista de la gran pobreza en la que vive más del 70 % de la población de Burundi. El Estado burundés se ha visto privado de recursos cruciales para financiar la efectividad de los derechos humanos económicos, sociales y culturales, como el acceso a la salud, la educación, la alimentación y el agua, así como los derechos civiles y políticos. Por ejemplo, menos del 5 % de la población de Burundi tiene acceso a la electricidad y el acceso al agua y el saneamiento sigue siendo muy bajo²⁰. La duración media de la escolaridad es de 3,1 años en lugar de los 11,3 previstos²¹, y 1,7 millones de burundeses padecen inseguridad alimentaria. El sistema judicial tiene una grave escasez de recursos, lo que contribuye a la generalización de la corrupción en el sistema judicial y a su sometimiento al ejecutivo²². La situación es tal que las autoridades han obligado a la población, ya pobre, a contribuir financieramente a la organización de las elecciones de 2020 o a diversos proyectos²³.

¹⁸ Véase Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, *Burundi Regional Refugee Response Plan: January 2019 – December 2020*.

¹⁹ A/HRC/39/CRP.1, párrs. 120 y 142 a 149 (documento disponible en el sitio web de la Comisión).

²⁰ Banco Mundial, Banco Mundial en Burundi, “Burundi – vue d’ensemble”. Puede consultarse en www.banquemondiale.org/fr/country/burundi/overview.

²¹ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Note d’information à l’intention des pays concernant le Rapport sur le développement humain 2019 : Burundi”. Puede consultarse en http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/fr/BDI.pdf.

²² A/HRC/39/CRP.1, párrs. 462 a 579, y A/HRC/42/CRP.2, párrs. 318 a 320 (documento disponible en el sitio web de la Comisión).

²³ A/HRC/39/CRP.1, párrs. 634 a 646.

1. Corruption

67. La corrupción es multifacética e incluye, en particular, el tráfico de influencias y el abuso de autoridad o de poder. La obtención de licencias en el sector minero está condicionada al pago de importantes sumas de dinero a determinadas personas que ocupan altos cargos políticos o administrativos, o a altos dirigentes del CNDD-FDD, ya sea directamente o a través de intermediarios. Algunos beneficiarios también poseen acciones en empresas mineras, a veces a través de testaferros. La Comisión también ha recibido denuncias de que existen prácticas similares en la mayoría de los sectores de la economía de Burundi, en particular cuando las empresas extranjeras quieren invertir en el país.

2. Malversación de fondos públicos

68. Desde un punto de vista global, la Comisión se basó en el estudio de los economistas sobre los desembolsos del Banco Mundial en concepto de asistencia oficial para el desarrollo a los países más pobres, que puso de manifiesto un fuerte vínculo entre esos desembolsos y las transferencias de activos hacia paraísos fiscales por parte de los residentes de esos mismos países entre 1990 y 2010²⁴. La Comisión se basó en datos públicos del Banco Mundial en los que se enumeraban las sumas pagadas por trimestre y por proyecto, así como las cantidades de activos en poder de residentes burundeses en el extranjero publicadas por el Banco de Pagos Internacionales de 2010 a 2019²⁵. Se observa una evidente correlación en este período para los activos mantenidos en Bélgica, Suiza y Luxemburgo. Los activos estudiados son los de las personas físicas o jurídicas que residen en Burundi pero que no son necesariamente nacionales. Estas transferencias de fondos pueden tener una motivación legal, pero el alcance de las coincidencias justificaría una investigación más a fondo.

69. La Comisión ha recibido denuncias creíbles de malversación de fondos públicos destinados a diversos proyectos de desarrollo financiados por la ayuda internacional. Por ejemplo, algunas familias de Burundi que fueron expropiadas en el marco de la construcción de proyectos de interés público no recibieron la indemnización prevista, ya que ésta habría sido parcialmente desviada. El Gobierno de Burundi ha reconocido públicamente la existencia de esas apropiaciones indebidas en relación con la construcción del palacio presidencial en Gasenyi²⁶.

70. La construcción de las presas de Jiji y Mulembwe debía ir acompañada del pago por el Gobierno de Burundi de 14,3 millones de dólares de los Estados Unidos para la electrificación de las aldeas de la zona y la indemnización de los expropiados²⁷. Sin embargo, los proyectos de ley de financiación preveían sumas muy inferiores para la indemnización de las poblaciones expropiadas. Por lo tanto, la diferencia entre esos presupuestos y las cantidades previstas en la ayuda al desarrollo plantea interrogantes.

71. Los acuerdos mineros entre las empresas privadas y el Estado de Burundi prevén generalmente el pago por parte de la empresa de una indemnización anual a las comunas y de cientos de miles de dólares para el desarrollo económico y social de la región. Sin embargo, la Comisión tiene motivos razonables para creer que, en el marco de varios acuerdos de concesiones mineras, una parte importante de esos fondos no ha sido recibida por los destinatarios previstos o no se ha materializado sobre el terreno en proyectos de desarrollo. Esto plantea interrogantes sobre lo que ocurrió con esos pagos y, si no se efectuaron, sobre las razones por las que el Estado burundés no trató de hacer cumplir los términos de esos contratos que se suponía que beneficiarían a su población.

²⁴ J. J. Andersen, N. Johannesen y B. Rijkers, "Elite Capture of Foreign Aid: Evidence from Offshore Bank Accounts", *Policy Research Working Paper 9150* (Banco Mundial, 2020).

²⁵ Banco de Pagos Internacionales, "Banks' cross-border positions on residents of Burundi". Disponible en <http://stats.bis.org/statx/srs/table/A6.2?c=BI&p> (consultado el 6 de agosto de 2020).

²⁶ Véase www.dw.com/fr/construction-dun-nouveau-palais-pr%C3%A9sidentiel-des-burundais-expropri%C3%A9s-attendent-toujours/a-41072323.

²⁷ Véase <http://documents.worldbank.org/curated/en/241731548424957473/pdf/PHJIMU-Rapport-dAudit-1-janv-au-30-Juin-2018.pdf>.

72. Por último, a pesar de que, desde 2016, la Unión Africana ha abonado directamente a las cuentas bancarias registradas del personal militar de Burundi desplegado en la Misión de la Unión Africana en Somalia la paga mensual de 800 dólares, a fin de evitar toda malversación, la Comisión tiene motivos fundados para creer que el Gobierno de Burundi ha seguido retirando sistemáticamente parte de ella por medios indebidos.

73. La mayoría de los asociados técnicos y financieros de Burundi son conscientes de los riesgos de malversación. Han adoptado medidas para reducirlos al mínimo, dejando de contribuir directamente al presupuesto del Estado en favor de la prestación de apoyo a los asociados operacionales, como las organizaciones no gubernamentales, o directamente a los beneficiarios de su asistencia. No obstante, las medidas adoptadas no siempre son suficientes.

3. Conflictos de interés y obtención ilegal de intereses

74. Sobre la base de la información públicamente disponible, la Comisión ha observado numerosos casos de conflictos de interés ante los que las autoridades cierran los ojos, aunque, sin que ello constituya un delito en sí mismo, esa situación propicia la corrupción, el favoritismo y la obtención ilegal de intereses, que son delitos con arreglo a la legislación de Burundi.

75. Por ejemplo, a pesar de la prohibición de que los ministros se dediquen a cualquier otra actividad profesional, de conformidad con el artículo 142 de la Constitución, uno de los ministros del Presidente Nkurunziza ha conservado su cargo de director gerente de una empresa de ingeniería civil que puede realizar actividades en las esferas que son de su competencia como ministro. Asimismo, un alto funcionario del Gobierno tiene su propia empresa de comunicaciones, a la que se le han adjudicado contratos públicos en la esfera que compete directamente a su responsabilidad. Varios altos funcionarios o asistentes de ministros han sido nombrados consejeros en las juntas de administración de empresas que operan en el sector que compete a sus carteras ministeriales.

76. La Comisión también ha recibido denuncias creíbles de que varias personas que ocupan altos cargos políticos o administrativos, entre otros en el seno del CNDD-FDD, son titulares al parecer de importantes participaciones en empresas que tienen un cuasi monopolio, de hecho o de derecho, para la comercialización en Burundi de determinados productos o servicios.

4. Contratación pública

77. Las adquisiciones públicas en Burundi se caracterizan por un alto grado de opacidad y por el abuso de las adjudicaciones directas, que a menudo benefician a personas cercanas al poder, situación que facilita la corrupción y la malversación de fondos públicos. En 2017, las adquisiciones públicas representaron más de 215.000 millones de francos burundeses (más de 111 millones de dólares de los Estados Unidos) —esto es, más de la cuarta parte de los gastos corrientes del presupuesto anual estimado del Estado—, de los cuales 18.000 millones correspondieron a adjudicaciones directas (unos 9 millones de dólares de los Estados Unidos)²⁸. Las prácticas comunes son la facturación en exceso y la infravaloración de los servicios. Por ejemplo, algunos bienes como los vehículos se compraron a dos o tres veces su valor de mercado actual, y las carreteras se han deteriorado muy rápidamente después de su construcción.

5. Fraudes aduaneros

78. Varios productos, como minerales tales como el oro, así como también el café y el petróleo, se exportan o importan sin ser declarados oficialmente, incluso mediante la corrupción de ciertas autoridades, lo que priva al Estado burundés de importantes ingresos fiscales. A pesar del carácter fragmentado de los datos disponibles públicamente sobre el comercio internacional de Burundi, la Comisión ha podido observar importantes incoherencias a este nivel, que son motivo de preocupación. Es cierto que esas

²⁸ Véase www.arpmp.bi/files/Rapports/Rapports%20Annuels/ARMP_RAPPORT_ANNUEL_2017_Version_du_20_avril_2018.pdf.

discrepancias pueden explicarse en parte por los errores de declaración o de recuento, las diferencias en el cálculo de los valores de mercado y la aplicación de diferentes tipos de cambio. Sin embargo, dada su magnitud, esas diferencias plantean la posibilidad de fraudes aduaneros en gran escala y arrojan luz sobre la falta general de transparencia en esta esfera.

6. Enriquecimiento ilícito

79. La Comisión ha obtenido información de que varias personas que ocupan altos cargos políticos o administrativos, entre otros en el seno del CNDD-FDD, poseen bienes inmuebles y/o activos en países extranjeros, a veces a nombre de testaferros, y que ellos mismos o personas de su entorno ocupan cargos directivos en varias empresas con sede en el extranjero, especialmente en Sudáfrica, Kenya y Bélgica. Además, el patrimonio de varias autoridades de Burundi, en particular el inmobiliario, parece desproporcionado con respecto a su remuneración oficial.

80. En vista de la corrupción que prevalece en la economía de Burundi y de las denuncias de pago de grandes sumas de dinero a esas mismas personas para obtener licencias de explotación, en particular en el sector minero, la Comisión tiene motivos razonables para creer que esas autoridades se han enriquecido ilícitamente. Cabe señalar que los dirigentes de Burundi nombrados por elección no declaran sistemáticamente su patrimonio al Tribunal Supremo al principio y al final de su mandato, como lo exigen los artículos 95 y 159 de la Constitución.

E. Responsabilidades

1. Responsabilidad del Estado burundés

81. Una vez más²⁹, la Comisión llega a la conclusión de que el Estado burundés puede ser considerado responsable de los hechos constitutivos de las violaciones de los derechos humanos documentadas en el presente informe.

82. Los actos de los agentes del Estado, en particular del Servicio Nacional de Inteligencia y de la policía, pero también de las autoridades administrativas que representan al Estado en las provincias, los municipios, las zonas y los distritos de las colinas, son directamente imputables al Estado burundés en virtud de la obligación de este de respetar los derechos humanos y de garantizar que sus agentes se abstengan de cometer violaciones.

83. A menudo los imbonerakure actúan solos, pero a veces lo hacen en presencia de representantes de la policía, del Servicio Nacional de Inteligencia o de las administraciones locales. Gozan de una gran libertad de acción conferida por las autoridades burundesas, que tienen los medios para controlarlos, así como de una impunidad casi total. Los imbonerakure todavía son utilizados regularmente —por no decir casi sistemáticamente— como auxiliares o como sustitutos de las fuerzas de seguridad, sobre todo en las zonas rurales, a petición o con el consentimiento de miembros, incluidos algunos de alto rango, del Servicio Nacional de Inteligencia, de la policía, de la presidencia y de las administraciones locales. Algunos poseen material y equipo militar que en principio está reservado a los cuerpos de defensa y de seguridad, como prendas de uniforme y botas militares, lo que demuestra el papel central que desempeñan en las estructuras de seguridad oficiales y no oficiales del Estado burundés. Cuando el comportamiento de los imbonerakure es reconocido y adoptado por agentes del Estado, cuando actúan siguiendo instrucciones o directrices de estos, o bajo su “total dependencia” o su “control efectivo”, el Estado burundés es directamente responsable de sus actos.

84. En las raras ocasiones en que los Imbonerakure habrían actuado al margen de este supuesto, la impunidad casi general de que se benefician por sus actos compromete igualmente la responsabilidad del Estado burundés, de conformidad con la obligación que este tiene de proteger los derechos humanos. De hecho, cuando el Estado tiene o debería haber tenido conocimiento de violaciones o vulneraciones cometidas por terceros, debe emprender investigaciones y enjuiciamientos efectivos, lo cual en general no ha sucedido.

²⁹ Véanse los documentos A/HRC/36/54 y Corr.1, A/HRC/39/63 y A/HRC/42/49.

2. Responsabilidad de los grupos armados

85. La Comisión no ha podido, debido en particular a la falta de acceso a las víctimas y a la reiterada negativa del Gobierno a facilitarle información, corroborar las denuncias de participación de grupos armados en violaciones de los derechos humanos, especialmente en incidentes de seguridad en los que podían haber participado.

IV. Delitos contemplados en el derecho internacional

A. Elementos constitutivos y tipología de los delitos

86. La Comisión sigue teniendo motivos razonables para creer que en Burundi se han cometido crímenes de lesa humanidad, según se definen en el Estatuto de Roma, como asesinatos, encarcelamientos u otras formas graves de privación de la libertad física, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, y persecuciones de carácter político³⁰.

87. La Comisión documentó los incidentes violentos cometidos durante el proceso electoral en varias provincias por distintos autores que tenían formas de actuación similares y un objetivo común, a saber, impedir que la oposición política ganara las elecciones comunales, legislativas y presidenciales del 20 de mayo de 2020, y permitir que el CNDD-FDD siguiera en el poder. Por tanto, esos incidentes pueden calificarse de “ataques sistemáticos” dirigidos deliberadamente contra civiles. El objetivo de ganar las elecciones por todos los medios y permanecer en el poder ha sido reiterado regularmente por los representantes del Gobierno y del CNDD-FDD, así como por las autoridades locales. El hecho de que los candidatos, representantes y funcionarios locales del CNDD-FDD fueran casi exclusivamente los únicos que sufrieron ataques demuestra la existencia de una estrategia contra este partido, considerado el principal rival del CNDD-FDD en estas elecciones. Los presuntos autores de esos delitos internacionales están claramente informados de dicho objetivo, lo cual significa que tienen necesariamente conocimiento del contexto en el que se inscriben sus actos.

B. Responsabilidades individuales

88. La Comisión ha actualizado su lista de presuntos autores de crímenes de lesa humanidad, que sigue siendo confidencial a fin de proteger a las fuentes y respetar la presunción de inocencia de los presuntos autores. Sin embargo, la Comisión se reserva el derecho de darla a conocer. La Comisión está sumamente preocupada por el hecho de que algunas de las personas que figuran en la lista ocupan altos cargos en el nuevo Gobierno y han sido ascendidas dentro de las fuerzas de defensa y seguridad desde que el nuevo Presidente Ndayishimiye asumió el cargo.

V. Factores de riesgo

89. Los factores de riesgo comunes a las atrocidades criminales que indican un posible deterioro de la situación de los derechos humanos en el contexto del proceso electoral han disminuido como resultado de la actual transición política, pero ninguno ha desaparecido por completo. Los que tienen una dimensión estructural continúan existiendo³¹. Sigue siendo indispensable adoptar medidas tangibles para que la situación evolucione positivamente.

90. El factor de riesgo núm. 1, relativo a un entorno inestable en lo que respecta a la política, la economía y la seguridad, sigue presente: la situación de seguridad sigue siendo volátil, como lo demuestran los diversos incidentes ocurridos desde octubre de 2019 y las tensiones recurrentes con algunos países vecinos; Muchos burundeses, tanto dentro como

³⁰ A/HRC/36/CRP.1, párrs. 682 a 691.

³¹ Véase A/HRC/42/49.

fuera del país, se encuentran en situación de emergencia humanitaria; el país atraviesa una grave crisis económica y la mayoría de la población vive en una gran pobreza; sigue habiendo cierta tensión política con las denuncias de fraude electoral masivo y la represión contra la CNL. Para mitigar este factor las autoridades pueden en particular hacer que cesen las violaciones contra los opositores políticos.

91. Los factores de riesgo núms. 2 y 3 se refieren a la impunidad general de que gozan los principales autores de violaciones graves de los derechos humanos. Están relacionados con la debilidad de las estructuras estatales que pueden prevenir o poner fin a esas violaciones. Garantizar la independencia y la imparcialidad del sistema judicial es esencial para mitigarlos. Sin embargo, es difícil prever una evolución positiva a este respecto mientras los autores de las violaciones, en particular los imbonerakure, sigan gozando de una impunidad casi total.

92. El factor de riesgo núm. 4 se refiere a la existencia de razones, objetivos u otros elementos que justifiquen el uso de la violencia contra grupos particulares. La existencia de intereses económicos vinculados a la conservación del poder, que es la clave para controlar la distribución de los recursos del país, es un elemento importante. Las autoridades deben combatir con mayor eficacia la corrupción y la malversación de fondos, incluidas en la cúpula del Estado, para mitigar este factor de riesgo. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación debería adoptar un enfoque más inclusivo en su labor e integrar las demás dimensiones de la justicia de transición en sus actividades a fin de reducir el riesgo de instrumentalización política de los agravios del pasado y los posibles deseos de venganza.

93. El factor de riesgo núm. 5, que se refiere a la capacidad de los autores potenciales de cometer crímenes atroces, no puede mitigarse mientras los imbonerakure sigan estando omnipresentes en la esfera pública y sustituyan a las fuerzas del orden y de seguridad, entre otros en el marco de los comités conjuntos de seguridad.

94. La falta de factores atenuantes (factor de riesgo núm. 6), como una sociedad civil nacional sólida, organizada y representativa y medios de comunicación libres, diversos e independientes, sigue siendo motivo de gran preocupación. Las declaraciones del presidente Ndayishimiye sobre este tema durante su discurso de investidura no fueron tranquilizadoras. La apertura del espacio democrático, que puede ser inmediata, es un indicador clave de la dirección que va a tomar el nuevo Gobierno. La reanudación de la cooperación con todo el sistema de las Naciones Unidas, incluida la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, pero también con las organizaciones no gubernamentales internacionales que trabajan en la esfera de los derechos humanos, sería otro importante factor atenuante.

95. El factor de riesgo núm. 7, que se refiere al clima y las circunstancias que propician la violencia y las violaciones de los derechos humanos, incluida la instrumentalización con fines políticos de la identidad, los acontecimientos del pasado o los motivos para cometer actos de violencia, se ha agravado en el contexto electoral de 2020. Han aumentado las declaraciones provocadoras o de incitación al odio dirigidas contra oponentes políticos, a veces con una dimensión étnica. Las autoridades deberían adoptar medidas para combatir eficazmente las violaciones de los derechos humanos de los opositores políticos y los actos de violencia, incluida la violencia sexual, contra las mujeres y los niños, y para castigar a los autores de las expresiones de odio.

96. El principal factor desencadenante (factor de riesgo núm. 8), que era la organización de las diversas elecciones en 2020, ha desaparecido. Sin embargo, las nuevas autoridades de Burundi siguen percibiendo las medidas adoptadas por la comunidad internacional como amenazas a la soberanía del Estado. Es probable que las denuncias de fraude masivo durante las elecciones del 20 de mayo de 2020 también pesen a largo plazo sobre la legitimidad del nuevo poder. Queda por ver si los atentados contra la vida, la integridad física, la libertad o la seguridad de los miembros de los partidos de la oposición cometidos en el contexto del proceso electoral continuarán o cesarán en los próximos meses.

97. La presencia continua de todos estos factores de riesgo proporciona una base objetiva para comprender la realidad de la situación de los derechos humanos en Burundi. Así como la vigilancia de la comunidad internacional ha contribuido a limitar el nivel de violencia en el contexto del proceso electoral, es fundamental que la situación de los

derechos humanos en el período crucial que representan los primeros meses del nuevo Gobierno sea seguida con la mayor atención por la comunidad internacional. Esta no debe dejar pasar la ocasión de pedir medidas tangibles en ese sentido.

VI. Conclusiones y recomendaciones

98. La Comisión tiene motivos fundados para creer que desde mayo de 2019 se han cometido graves violaciones de los derechos humanos, algunas de las cuales podrían constituir crímenes de lesa humanidad, principalmente en el contexto del proceso electoral de 2020. En particular, ha documentado casos de violaciones del derecho a la vida, numerosos casos de arresto y detención arbitrarios, torturas y otros malos tratos, casos de violación y violencia sexual y vulneraciones de libertades civiles fundamentales. Los principales autores fueron imbonerakure, responsables administrativos locales, agentes de policía y agentes del Servicio Nacional de Inteligencia. Han seguido disfrutando de una impunidad casi total.

99. Los niños sufren los efectos nefastos de las numerosas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2015. El sistema económico de Burundi se basa en la corrupción y la apropiación indebida de fondos públicos, incluidos los que proceden de la asistencia internacional para el desarrollo, en beneficio de personas que ocupan altos cargos en el Gobierno y la administración que se han enriquecido así ilícitamente. Esas prácticas no son casos aislados sino el resultado de un sistema que refleja una concepción patrimonial del poder y están directamente vinculadas a las violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2015.

100. Los principales factores de riesgo siguen presentes, en particular los que tienen una dimensión estructural. Solo pueden desaparecer si las nuevas autoridades toman medidas tangibles.

101. Habida cuenta de la profundidad histórica de la crisis de Burundi y de la dimensión en parte estructural de las violaciones de los derechos humanos, y teniendo en cuenta el principio de la responsabilidad de proteger al pueblo de Burundi, entre otros en el contexto de la transición política que se está llevando a cabo en el país, así como las medidas que pueden mitigar los factores de riesgo, la Comisión reitera en primer lugar sus recomendaciones anteriores³², que siguen siendo totalmente válidas y pertinentes, especialmente las dirigidas a las autoridades de Burundi en relación con las medidas prioritarias para poner fin a las violaciones de los derechos humanos y los crímenes internacionales, luchar contra la impunidad y mejorar la situación de los derechos humanos en el país, en particular la reapertura del espacio democrático y la protección de las libertades públicas. Sus recomendaciones sobre medidas a más largo plazo relativas al examen del marco jurídico y la reforma del poder judicial siguen siendo cruciales.

102. En segundo lugar, la Comisión hace las siguientes recomendaciones a las autoridades de Burundi:

- a) Reabrir la oficina en el país de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos;
- b) Liberar inmediatamente a los defensores de los derechos humanos y los periodistas detenidos arbitrariamente, así como a todos los presos políticos, en particular a los de los partidos de la oposición detenidos y encarcelados en el contexto de las elecciones de 2020;
- c) Garantizar la seguridad, la libertad y la integridad física de los miembros de los partidos de la oposición, incluido el CNL, y asegurar que no sean objeto de actos de intimidación, acoso o cualquier forma de discriminación en represalia por su compromiso político;

³² Véase el anexo III.

d) Restablecer todas las libertades civiles para que las elecciones futuras sean libres, creíbles y transparentes;

e) Poner fin a la usurpación de las funciones de las fuerzas de seguridad o de la justicia por parte de los imbonerakure, y enjuiciar y castigar de manera ejemplar a los que estén implicados en las violaciones, si no disolver esta liga;

f) Reformar los comités mixtos de seguridad humana para hacerlos más inclusivos y limitar sus competencias;

g) Cumplir sus obligaciones específicas con respecto a los derechos de la mujer y los derechos del niño;

h) Poner fin al reclutamiento de niños por los imbonerakure y dismantelar la agrupación de los “aguiluchos” del CNDD-FDD;

i) Establecer servicios de atención psicosocial para los niños víctimas y testigos de violaciones graves, en particular entre los repatriados;

j) Garantizar el acceso a la justicia y a los servicios médicos y psicosociales adaptados a las víctimas de la violencia sexual, incluidos los hombres;

k) Establecer una cuota del 30 % de mujeres en los consejos de los distritos de las colinas;

l) Reanudar la plena cooperación con la Organización Mundial de la Salud;

m) Adoptar medidas para combatir eficazmente la malversación, en particular garantizando la transparencia, la competencia y el establecimiento de criterios objetivos y predeterminados para la adjudicación de contratos públicos, así como un sistema eficaz de recursos internos, e investigar las denuncias de casos de adquisición ilícita de bienes;

n) Adherirse a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas y aplicar las normas conexas;

o) Publicar sistemáticamente el presupuesto anual ejecutado;

p) Asegurarse de que los altos responsables políticos y administrativos hagan sistemáticamente una declaración pública de su patrimonio al asumir el cargo y al final de su mandato.

103. A los grupos rebeldes de la oposición, la Comisión les recomienda que se abstengan de todo acto violento.

104. A la comunidad internacional, de conformidad con su deber de vigilancia, la Comisión formula las siguientes recomendaciones:

a) Mantener un mecanismo internacional independiente que pueda hacer un seguimiento de manera objetiva la situación de los derechos humanos en Burundi, entre otras cosas mediante factores de riesgo y la aplicación de las recomendaciones de la Comisión;

b) Basar la reanudación de la cooperación internacional con Burundi y el levantamiento de las sanciones en progresos tangibles en la esfera de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad y la corrupción;

c) Velar por que los refugiados no se vean obligados a regresar a Burundi mientras las condiciones en el país no sean propicias, y solicitar el libre acceso a los repatriados para evaluar su situación;

d) Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la esfera de los derechos humanos en Burundi, en particular para hacer investigaciones y elaborar informes públicos.

105. A los Estados y a las organizaciones internacionales que financian programas de asistencia internacional para el desarrollo, la Comisión les recomienda que refuercen sus procedimientos para reducir al mínimo el riesgo de malversación de

fondos e inicien sistemáticamente investigaciones sobre las denuncias recibidas a este respecto, a fin de garantizar que esa asistencia se utilice plenamente para los fines previstos y en favor de los beneficiarios a la que está destinada.

106. Al sistema de las Naciones Unidas, incluidos sus organismos, la Comisión le formula las siguientes recomendaciones:

a) De conformidad con la política de diligencia debida en materia de derechos humanos, prestar apoyo solo cuando haya garantías de que quienes han de beneficiarse de él no sean autores de violaciones graves de los derechos humanos, ya sea a título individual o institucional, y no preste ese apoyo cuando haya habido denuncias creíbles a este respecto o cuando las autoridades competentes no adopten las medidas correctivas o de mitigación necesarias;

b) Fortalecer el apoyo a la respuesta a la violencia sexual o por motivo de género para atender mejor las necesidades específicas de las víctimas, también entre los refugiados.

Annexes

Annexe I

I. Carte du Burundi



Annexe II

Correspondances avec le Gouvernement du Burundi

1. Note verbale envoyée à la Mission permanente du Burundi le 22 août 2019

NATIONS UNIES
DROITS DE L'HOMME
HAUT-COMMISSARIAT



UNITED NATIONS
HUMAN RIGHTS
OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER

HAUT-COMMISSARIAT AUX DROITS DE L'HOMME • OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS
COMMISSION OF INQUIRY ON BURUNDI • COMMISSION D'ENQUETE SUR LE BURUNDI
PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ColBurundi • TEL: +41 22 917 9313 • FAX: +41 22 917 9008 • E-MAIL: coiburundi@ohchr.org

REFERENCE: 2019/COI/BRD/NV/33

La Commission d'enquête sur le Burundi présente ses compliments à la Mission permanente de la République du Burundi auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève et souhaite l'informer que ses trois Commissaires : M. Doudou Diène (Président), Mme Françoise Hampson et Mme. Lucy Asuagbor (membres) seront à Genève pour la présentation de leur rapport final à la quarante deuxième session du Conseil des droits de l'homme qui aura lieu le 17 septembre 2019.

La Commission saisit cette opportunité pour solliciter une rencontre avec son Excellence Monsieur Rénovat Tabu, Représentant permanent du Burundi auprès de l'Office des Nations Unies à Genève pour discuter des questions relatives aux travaux de la Commission. La Commission propose une rencontre le 06 septembre 2019 à 09 :00. Toute communication à cet égard, notamment pour convenir d'un lieu de rencontre qui soit mutuellement acceptable peut être adressée à notre secrétariat : Mme Françoise Kenfack, assistante administrative, courriel: fkenfack@ohchr.org.

La Commission saisit également cette occasion pour renouveler à la Mission permanente de la République du Burundi auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève les assurances de sa haute considération.



Mission permanente de la République du Burundi
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales à Genève
Rue de Lausanne 44
1201 Genève
Email : mission.burundi217@gmail.com

2. Note verbale envoyée à la Mission permanente du Burundi le 2 septembre 2019



REFERENCE: 2019/COI/BRD/NV/35

La Commission d'enquête sur le Burundi présente ses compliments à la Mission permanente de la République du Burundi auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève et la prie de trouver ci-joint une version avancée de son rapport final A/HRC/42/49 qui sera présentée à la quarante-deuxième session du Conseil des droits de l'homme.

La Commission saisit cette opportunité pour informer la Mission permanente du Burundi qu'elle tiendra une conférence de presse le 4 septembre 2019 à 13 heures, afin de présenter les conclusions de son enquête contenues dans le rapport ci-joint.

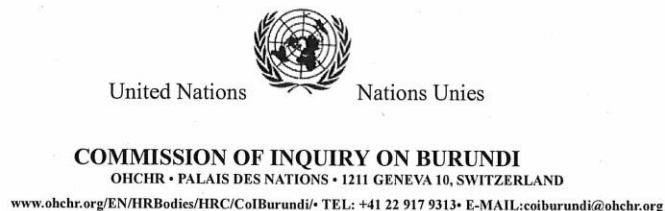
La Commission saisit également cette occasion pour renouveler à la Mission permanente de la République du Burundi auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève les assurances de sa haute considération.



Geneva, 2 September 2019 2019

Mission permanente de la République du Burundi
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales à Genève
Rue de Lausanne 44
1201 Genève
Fax: +41 22 732 77 34
Email : mission.burundi217@gmail.com

3. Lettre envoyée à la Mission permanente du Burundi le 4 octobre 2019



4 October 2019

REFERENCE: 2019/COI/BRD/NY/1

Excellency,

On behalf of the Commission of Inquiry on Burundi, following the presentation of our report at the latest session of the Human Rights Council in Geneva, I have the honour to seek a meeting with your Excellency during our upcoming visit to New York. You may be aware that Commissioner Françoise Hampson and I are due to present the report to the United Nations General Assembly on Wednesday, 23 October 2019.

If your availability so permits, we would be pleased to meet on Monday, 21 October 2019, at 9.00 a.m. at UNHQ. The specific meeting room will be conveyed to your office in due course. Communication regarding the proposed meeting may be directed to coiburundi@ohchr.org.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Doudou Diène
President
Commission of Inquiry on Burundi

His Excellency
Mr. Albert Shingiro
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Permanent Representative
Permanent Mission of the Republic of Burundi to the United Nations in New York
E-mail: ambabunewyork@yahoo.fr

4. Lettre envoyée à la Mission permanente du Burundi le 4 février 2020



Le 4 février 2020

REFERENCE: 2020/COI/BRD/Lettre/03

Excellence,

J'ai l'honneur de me référer à la résolution 42/26 adoptée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies le 27 septembre 2019, par laquelle il a décidé de proroger le mandat de la Commission d'enquête sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Je souhaite réitérer la volonté de la Commission d'instaurer un dialogue avec les autorités burundaises en vue de l'accomplissement de son mandat, conformément à l'esprit de coopération voulu par le Conseil. Je vous réaffirme donc la disponibilité des membres de la Commission pour vous rencontrer en marge de la 43^{ème} session du Conseil en mars 2020.

Le Conseil des droits de l'homme dans sa résolution 42/26: « engage vivement le Gouvernement burundais à tenir dûment compte des recommandations que la Commission d'enquête a formulées dans ses rapports et à les mettre en œuvre, notamment en vue de réduire sensiblement les risques recensés dans le rapport le plus récent de la Commission, en particulier dans le contexte électoral ».

Les attaques et les incidents sécuritaires qui ont eu lieu à Masare, zone Muyebe, commune Musigati, province de Bubanza, le 22 octobre 2019, ainsi qu'à Marura, commune de Mabayi, province de Cibitoke, dans la nuit du 16 au 17 novembre 2019 sont à cet égard très préoccupants. Les incidents récents attestent de la pertinence de l'analyse de la Commission concernant les facteurs de risque dans le contexte des élections à venir (voir A/HRC/42/49 et A/HRC/42/CRP.2). Il est donc urgent que votre Gouvernement prenne des mesures adéquates et pertinentes afin d'atténuer les risques notamment en ce qui concerne l'instabilité en matière de sécurité (facteur de risque no. 1), l'absence de facteurs atténuants (facteur de risque no. 6), l'existence de circonstances propices à la perpétration d'atrocités criminelles (facteur de risque no. 7) et l'existence de facteurs déclencheurs (facteur de risque no. 8). Parmi les recommandations contenues dans le dernier rapport de la Commission qui sont les plus à même d'avoir un impact rapide et de contribuer à un climat électoral apaisé, je souhaite mettre en avant les suivantes :

Son Excellence
Monsieur Rénovat Tabu
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Représentant permanent de la République du Burundi
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales à Genève
Rue de Lausanne 44
1201 Genève
mission.burundi217@gmail.com



COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE BURUNDI

PAGE 2

« • Se réengager de manière constructive et coopérative avec tous les mécanismes internationaux et régionaux des droits de l'homme et le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, en leur permettant d'assurer pleinement et librement leurs mandats de suivi des droits de l'homme ;

- Prendre les mesures nécessaires afin de garantir la liberté d'établissement, d'organisation et de fonctionnement des ONG étrangères et locales, y compris en révisant les lois les régissant ;

- Prendre les mesures nécessaires afin de garantir la liberté d'information dans le pays et le droit des médias locaux et internationaux d'exercer leurs activités conformément aux standards internationaux, y compris en révisant les lois sur la presse et le CNC ;

- Garantir la jouissance effective des libertés publiques, notamment les libertés d'opinion, d'expression, d'accès à l'information, d'association, d'assemblée et de religion, y compris en mettant fin à toute pratique de recrutement forcé au sein du parti au pouvoir et de sa ligue des jeunes ;

- Garantir que tous les partis politiques puissent mener leurs activités légitimes en toute liberté et sécurité, dans un climat de tolérance politique, notamment en sanctionnant tout propos d'incitation à la haine et à la violence contre les autres partis politiques et leurs membres ;

- Garantir dans la pratique l'indépendance structurelle de la CENI, notamment en révisant le décret la régissant afin que sa composition soit inclusive et équilibrée, et renforcer les capacités de ses membres aux échelons municipaux et provinciaux ;

- Permettre l'accès d'observateurs électoraux indépendants, internationaux et régionaux, et leur garantir, ainsi qu'aux observateurs nationaux issus de la société civile ou des partis politiques, une liberté de mouvement et d'action avant, pendant et après les élections ;

- Libérer immédiatement tous les prisonniers politiques arrêtés et détenus en lien avec l'exercice de leurs droits démocratiques ;

- Mettre fin à l'impunité des Inbonerakure en exerçant un contrôle sur eux pour éviter l'usurpation des fonctions des forces de sécurité ou de la justice, et faire cesser leurs activités répressives et démonstrations de force sur les collines ;

- Mettre fin à toutes les contributions illégales. »

Je suis confiant que divers acteurs de la communauté internationale, et particulièrement le Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, seront prêts à appuyer votre Gouvernement afin de les mettre en œuvre.



COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE BURUNDI

PAGE 3

D'autre part, je vous adresse une liste de questions sur la situation des droits de l'homme au Burundi (voir annexe), dont certaines avaient déjà été demandées à votre Gouvernement dans mon courrier daté du 2 avril 2019, resté malheureusement sans réponse. Au vu des facteurs de risque identifiés dans le dernier rapport de la Commission, ces points sont importants pour surveiller l'évolution de la situation, mais également permettre d'inclure dans notre rapport final d'avantage d'informations sur les éventuelles atteintes aux droits de l'homme. A cet égard, j'espère que les conclusions des enquêtes menées par votre Gouvernement sur les incidents sécuritaires du 2 octobre et du 16-17 novembre 2019 seront partagées avec la Commission ou rendus publics.

Veuillez accepter, Excellence, les assurances de ma plus haute considération.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diène".

M. Doudou Diène
Président de la Commission d'enquête sur le Burundi



COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE BURUNDI

PAGE 4

Annexe - Questions sur la situation des droits de l'homme au Burundi

Pouvez-vous nous transmettre toutes les informations et données à votre disposition concernant :

- Les incidents sécuritaires et les exactions commises sur le territoire du Burundi dans lesquels l'implication des groupes armés d'opposition burundais est présumée, notamment les incidents du 22 octobre et du 16-17 novembre 2019 et les conclusions des enquêtes menées à ce sujet par le Gouvernement du Burundi ;
- Les statistiques désagrégées des cas de violences graves contre les femmes et les enfants depuis juin 2019 et les mesures prises par le Gouvernement burundais pour prévenir et lutter contre celles-ci ;
- Les statistiques des cas de violations et atteintes au droit à la vie depuis juin 2019 et les mesures prises par le Gouvernement burundais pour prévenir et lutter contre celles-ci ;
- Les enquêtes et poursuites judiciaires dans les cas d'atteintes aux droits de l'homme ainsi que celles contre des membres présumés de groupes armés burundais d'opposition ;
- Le nombre et l'état des enquêtes ouvertes dans les cas de violation des droits de l'homme et de poursuites judiciaires contre les principaux auteurs présumés de telles violations ;
- Les mesures prises par le Gouvernement burundais pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission, principalement celles soulignées dans la présente lettre ;
- Les mesures prises pour enquêter sur les allégations de disparitions forcées, y compris afin de rechercher, localiser et libérer les personnes disparues et, en cas de décès, d'exhumer, identifier les personnes disparues et restituer leurs restes ;
- Les mesures prises pour garantir l'indépendance objective des institutions nationales des droits de l'homme, notamment leur indépendance structurelle et financière, ainsi que les moyens et les méthodes de travail qui leur permettent de travailler de manière indépendante ;
- Les mesures prises pour garantir les libertés d'expression, d'information, de circulation, d'association et de réunion pacifique, notamment celles des partis politiques d'opposition et de leurs membres, ainsi que le droit à la liberté et à la sécurité de ces derniers ;
- Les mesures prises par le Gouvernement du Burundi pour prévenir et lutter contre les déclarations provocatrices, les campagnes de propagande ou d'incitation à la haine, notamment sur la base de l'origine ethnique ou géographique, de l'opinion politique, ou du sexe, notamment dans le contexte du processus électoral ;
- Les mesures prises afin de garantir la protection des burundais qui ont décidé de rentrer volontairement au Burundi après avoir pris refuge à l'étranger, notamment contre les possibles exactions commises à leur encontre par les autorités locales et les Imbonerakure, et faciliter leur réintégration dans leurs communautés d'origine, ainsi que les mécanismes mis en place pour vérifier de manière indépendante la situation de ces personnes ;
- Les mesures prises pour garantir l'existence et fonctionnement d'un mécanisme d'alerte rapide permettant de prévenir des atrocités criminelles ;



COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE BURUNDI

PAGE 5

- Les statistiques désagrégées concernant les épidémies de malaria et de choléra depuis juin 2019 (nombre de cas enregistrés, nombre de décès) et les mesures prises pour lutter contre ces épidémies.

5. **Note verbale envoyée à la Mission permanente du Burundi
le 13 juillet 2020**



COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE BURUNDI

OHCHR • PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIBurundi/• TEL: +41 22 917 9313• E-MAIL: coiburundi@ohchr.org

REFERENCE: 2020/COI/BRD/NV/11

La Commission d'enquête sur le Burundi présente ses compliments à la Mission permanente de la République du Burundi auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève et la prie de trouver ci-joint, la présentation orale qu'elle présentera le 14 Juillet 2020 au Conseil des droits de l'homme.

La Commission d'enquête sur le Burundi saisit cette occasion pour renouveler à la Mission permanente de la République du Burundi auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève les assurances de sa haute considération.

Genève, le 13 juillet 2020

Mission permanente de la République du Burundi
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales à Genève
Rue de Lausanne 44
1201 Genève
Fax: +41 22 732 77 34
Email : mission.burundi217@gmail.com

Annexe III

Recommandations antérieures faites par la Commission

1. Recommandations faites en 2019

Version française

103. La tenue des élections de 2020 est un facteur de risque important. Afin qu'elles puissent se dérouler dans un climat apaisé tout en étant justes, libres, transparentes et crédibles, la Commission adresse aux autorités burundaises les recommandations suivantes :

a) Mettre en œuvre toutes les recommandations précédentes de la Commission³³, qui restent plus que jamais valables et pertinentes, notamment celles concernant les mesures prioritaires afin de faire cesser les violations des droits de l'homme et les crimes internationaux, de lutter contre l'impunité, et d'améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays, ainsi que celles à moyen et à plus long terme relatives à la révision du cadre juridique et à la réforme du système judiciaire ;

b) Diligenter sans délai des enquêtes indépendantes et effectives sur les cas de violations documentés par la Commission depuis 2015, afin de permettre l'instauration d'un climat de confiance et de tolérance politique encourageant une participation inclusive dans le processus électoral ;

c) Se réengager de manière constructive et coopérative auprès de tous les mécanismes internationaux et régionaux des droits de l'homme et du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, en leur permettant d'assurer pleinement et librement leurs mandats de suivi des droits de l'homme ;

d) Assurer l'indépendance structurelle et financière des mécanismes nationaux des droits de l'homme et renforcer la capacité de leurs membres ;

e) Prendre les mesures nécessaires afin de garantir la liberté d'établissement, d'organisation et de fonctionnement des ONG étrangères et nationales, y compris en révisant les lois qui les régissent ;

f) Prendre les mesures nécessaires afin de garantir la liberté d'information dans le pays et le droit des médias locaux et internationaux d'exercer leurs activités conformément aux normes internationales, y compris en révisant les lois sur la presse et le Conseil national de la communication ;

g) Garantir la jouissance effective des libertés publiques, notamment les libertés d'opinion, d'expression, d'accès à l'information, d'association, d'assemblée et de religion, y compris en mettant fin à toute pratique de recrutement forcé au sein du parti au pouvoir et de sa ligue des jeunes ;

h) Appliquer les Lignes directrices sur l'accès à l'information et les élections en Afrique et les Lignes directrices sur la liberté d'association et de réunion en Afrique de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ;

i) Garantir que tous les partis politiques peuvent mener leurs activités légitimes en toute liberté et sécurité, dans un climat de tolérance politique, notamment en sanctionnant tout propos d'incitation à la haine et à la violence contre les autres partis politiques et leurs membres ;

j) Garantir, dans la pratique, notamment en révisant le Code électoral, le droit à prendre part à la gestion des affaires publiques sans discrimination ;

k) Garantir, dans la pratique, l'indépendance structurelle de la Commission électorale nationale indépendante, notamment en révisant le décret la régissant afin que sa

³³ Voir annexe III (A/HRC/36/54 et Corr.1, par. 85 à 94 ; et A/HRC/39/63, par. 85 et 86).

composition soit inclusive et équilibrée, et renforcer les capacités de ses membres aux échelons municipal et provincial ;

l) Permettre l'accès d'observateurs électoraux indépendants, internationaux et régionaux, et leur garantir, ainsi qu'aux observateurs nationaux issus de la société civile ou des partis politiques, une liberté de mouvement et d'action avant, pendant et après les élections ;

m) Appliquer les Directives pour les missions d'observation et de suivi des élections de l'Union africaine ;

n) Permettre aux opposants politiques de rentrer d'exil afin de participer aux élections de 2020, et garantir leur liberté et leur sécurité, notamment en annulant les mandats d'arrêt contre ceux qui n'ont pas utilisé ou prôné la violence ;

o) Libérer immédiatement tous les prisonniers politiques arrêtés et détenus en lien avec l'exercice de leurs droits démocratiques ;

p) Renforcer la formation des forces de maintien de l'ordre, afin d'éviter les mauvais traitements et d'assurer une gestion pacifique des foules ;

q) Appliquer les Lignes directrices pour le maintien de l'ordre par les agents chargés de l'application des lois lors des réunions en Afrique, et le manuel de formation y relatif, élaborés par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ;

r) Mettre fin à l'impunité des Imbonerakure en exerçant un contrôle sur eux, afin d'éviter l'usurpation des fonctions des forces de sécurité ou de la justice et de faire cesser leurs activités répressives et démonstrations de force sur les collines ;

s) Mettre fin à toutes les contributions illégales.

104. À tous les partis politiques burundais, qu'ils participent ou non aux élections, la Commission recommande de s'abstenir de tout acte violent et de toute incitation à la haine et à la violence, notamment dans le contexte des élections de 2020.

105. Aux groupes rebelles d'opposition, la Commission recommande de s'abstenir de tout acte violent et de toute incitation à la haine et à la violence.

106. À la communauté internationale, y compris l'Union africaine et le système des Nations Unies, la Commission adresse les recommandations suivantes :

a) Renouveler le mandat de la présente Commission pour une année supplémentaire ;

b) Continuer à suivre l'évolution de la situation des droits de l'homme au Burundi dans le contexte des élections de 2020 et, conformément aux principes de prévention et d'alerte précoce, faire régulièrement l'évaluation des risques, afin de permettre, en cas de détérioration, que soient développées et mises en œuvre des stratégies de réponse adaptées ;

c) Mettre tout en œuvre pour assurer la tenue d'un dialogue inter burundais inclusif afin de régler la crise politique ;

d) Soutenir le renforcement des capacités des observateurs électoraux internationaux, régionaux et nationaux ;

e) Envoyer des observateurs régionaux ou internationaux uniquement si leur liberté d'action est garantie dans la pratique ;

f) S'assurer que l'aide humanitaire parvient intégralement à la population ;

g) Répondre à l'appel de financement du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en faveur des réfugiés burundais ;

h) S'assurer que le suivi des rapatriés se fait dans la durée, de manière plus fréquente et transparente.

107. Plus particulièrement, la Commission recommande au système des Nations Unies, conformément à l'initiative Les droits de l'homme avant tout, d'intensifier la promotion des droits de l'homme relevant des mandats propres aux agences et programmes concernés, de

même que la collecte et la publication de données objectives et fiables sur la situation au Burundi.

108. Aux États membres du Conseil de sécurité, la Commission recommande de maintenir le Burundi dans le programme de travail du Conseil, au regard des facteurs de risque identifiés, et d'inviter la Commission à lui rendre compte de ses conclusions.

Version anglaise

109. The 2020 elections pose a major risk. To ensure that they are peaceful, fair, free, transparent and credible, the Commission makes the following recommendations to the Burundian authorities:

(a) Give effect to all the Commission's previous recommendations, which are more well-founded and relevant than ever, including those concerning priority measures to end human rights violations and international crimes, combat impunity and improve the human rights situation in the country and the medium- and longer-term recommendations on reforms to the legal framework and the judicial system³⁴;

(b) Conduct prompt, independent and effective investigations into the cases of violations documented by the Commission since 2015 with a view to creating a climate of trust and political tolerance conducive to inclusive participation in the electoral process;

(c) Re-engage constructively and cooperatively with all international and regional human rights mechanisms and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, enabling them to carry out their human rights monitoring mandates fully and freely;

(d) Ensure that national human rights mechanisms are institutionally and financially independent and build the capacity of their members;

(e) Take the measures necessary to ensure that foreign and domestic NGOs can be freely established and organized and that they can operate freely, including by amending the laws regulating them;

(f) Take the measures necessary to ensure freedom of information in the country and the right of local and international media to operate in accordance with international standards, including by amending the laws on the press and the National Communication Council;

(g) Guarantee the effective enjoyment of civil liberties, including the freedoms of opinion, expression, access to information, association, assembly and religion, not least by ending all forced recruitment to the ruling party and its youth league;

(h) Follow the Guidelines on Access to Information and Elections in Africa and the Guidelines on Freedom of Association and Assembly of the African Commission on Human and Peoples' Rights;

(i) Ensure that all political parties can engage in legitimate activities in complete freedom and security, in an environment of political tolerance, including by punishing any incitement to hatred and calls for violence against other political parties and their members;

(j) Ensure, in practice, the right to participate in the conduct of public affairs without discrimination, in particular by amending the Electoral Code;

(k) Ensure, in practice, the institutional independence of the Independent National Electoral Commission, including by amending the decree governing it to make certain that its composition is inclusive and balanced, and strengthen the capacity of its members at the municipal and provincial levels;

(l) Provide access to independent international and regional election observers and ensure that they and national observers from civil society or political parties enjoy freedom of movement and action before, during and after the elections;

³⁴ See annex III (A/HRC/36/54 and Corr.1, paras. 85–94, and A/HRC/39/63, paras. 85–86).

(m) Follow the Guidelines for African Union Electoral Observation and Monitoring Missions;

(n) Allow political opponents to return from exile to participate in the 2020 elections and guarantee their freedom and security, including by revoking warrants for the arrest of those who have not used or advocated violence;

(o) Immediately release all political prisoners arrested and detained in connection with the exercise of their democratic rights;

(p) Make the training provided to law enforcement agencies more robust to avoid ill-treatment and ensure the peaceful control of crowds;

(q) Follow the Guidelines for the Policing of Assemblies by Law Enforcement Officials in Africa and the related training manual, both developed by the African Commission on Human and Peoples' Rights;

r) End the impunity of the Imbonerakure by exercising control over them so as to ensure that the functions of the security forces or the judiciary are not usurped and put an end to their repressive activities and shows of force in the hills;

(s) End all illegal contributions.

110. The Commission recommends that, whether they participate in the elections or not, all political parties in Burundi refrain from violence and incitement to hatred or violence, particularly against the backdrop of the 2020 elections.

111. The Commission recommends that opposition rebel groups refrain from violence and incitement to hatred or violence.

112. For the international community, including the African Union and the United Nations system, the Commission has the following recommendations:

(a) Renew the mandate of the Commission for an additional year;

(b) Continue to monitor developments in the human rights situation in Burundi in the context of the 2020 elections and, in accordance with the principles of prevention and early warning, carry out regular risk assessments to enable the development and use of appropriate response strategies in the event of deterioration;

(c) Make every effort to ensure that an inclusive inter-Burundi dialogue is held to resolve the political crisis;

(d) Support capacity-building for international, regional and national election observers;

(e) Send regional or international observers only if their freedom of action is guaranteed in practice;

(f) Ensure that all humanitarian aid reaches the population;

(g) Respond to the appeal made by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees for funds for Burundi refugees;

(h) Ensure that returnees are monitored in a sustained and more regular and transparent manner.

113. In particular, the Commission recommends that the United Nations system, in accordance with the initiative Human Rights Up Front, take stronger measures to promote human rights, under the mandates of the relevant agencies and programmes, and to collect and publish objective and reliable data on the situation in Burundi.

114. In view of the risk factors that have been identified, the Commission recommends that the States members of the Security Council keep Burundi on the Council's programme of work and that the Council invite the Commission to report to it on its conclusions.

2. Recommandations faites en 2018

Version française

115. La Commission recommande au Gouvernement burundais, comme mesures prioritaires :

- a) De mettre immédiatement un terme aux violations graves des droits de l'homme commises par des agents de l'État et des Imbonerakure ;
- b) D'établir, avec le soutien de la communauté internationale, des mécanismes ad hoc chargés d'enquêter sur les violations des droits de l'homme et de poursuivre les auteurs de crimes de droit international qui ne font pas l'objet d'une enquête par la Cour pénale internationale ;
- c) D'établir, avec le soutien de la communauté internationale, une entité indépendante chargée de faire la lumière sur les cas de disparition signalés depuis avril 2015, de localiser les possibles fosses communes, d'exhumer et d'identifier les corps ;
- d) De prendre des mesures pour que les victimes de torture et les femmes ayant subi des violences sexuelles aient accès à des soins appropriés, en particulier un libre accès à tous les soins de santé sexuelle et reproductive, ainsi qu'à un soutien psychologique ;
- e) D'appliquer les Lignes directrices sur la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences en Afrique de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ;
- f) De contrôler les hausses des prix, en particulier en revoyant l'augmentation des taxes et des impôts qui porte atteinte au droit à un niveau de vie suffisant de la population, et en supprimant les contributions qui touchent disproportionnellement les personnes les plus pauvres ;
- g) De coopérer avec les mécanismes internationaux des droits de l'homme, notamment :
 - i) En accueillant à nouveau des missions de procédures spéciales ;
 - ii) En mettant en œuvre les recommandations de l'examen périodique universel, des organes conventionnels et des procédures spéciales, notamment en établissant un mécanisme national d'élaboration des rapports et de suivi ;
- h) D'autoriser le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à reprendre sans entrave l'ensemble de ses activités au Burundi ;
- i) De signer et de mettre en œuvre le mémorandum d'entente avec l'Union africaine et de permettre le déploiement complet des 100 observateurs des droits de l'homme.

116. La Commission recommande également au Gouvernement burundais, à moyen et plus long termes :

- a) De réviser la loi organique du 8 mars 2018 portant révision de la loi n° 01/03 du 24 janvier 2013 portant missions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national de la communication afin de garantir l'indépendance de ce dernier ;
- b) De ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;
- c) De réviser les dispositions du Code de procédure pénale pour les mettre en conformité avec les normes internationales, en particulier les dispositions relatives aux délais de garde à vue et de contrôle de la détention, aux perquisitions de nuit et sans mandat, à la procédure de « flagrance », à l'infraction d'« atteinte à la sûreté intérieure de l'État », et à celles accordant une impunité de jure aux magistrats et aux officiers de police judiciaire ;

d) De mettre fin aux détentions arbitraires et d'améliorer les conditions de détention :

- En appliquant les Lignes directrices sur les conditions d'arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ;
- En garantissant le contrôle de la légalité des détentions et leur conformité avec les droits de l'homme ;

e) Faute d'un système judiciaire indépendant et performant, de coopérer pleinement avec la Cour pénale internationale dans l'enquête qu'elle a ouverte le 25 octobre 2017 ;

f) D'engager une réforme en profondeur du système judiciaire afin de garantir son indépendance, son impartialité et son effectivité, notamment :

- i) En appliquant les Directives et les Principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ;
- ii) En publiant les conclusions des états généraux de la justice de 2013 et en réunissant les acteurs du secteur et les partenaires internationaux pour discuter des mesures de suivi ;
- iii) En augmentant le budget du secteur de la justice et en garantissant son autonomie de gestion ;
- iv) En revalorisant la rémunération des magistrats des juridictions ordinaires ainsi que les moyens et l'équipement à leur disposition ;
- v) En informatisant les greffes ;
- vi) En revoyant la composition du Conseil supérieur de la magistrature afin que ses membres soient en majorité désignés par leurs pairs ;
- vii) En revoyant les procédures de nomination, d'affectation, de notation et d'avancement des magistrats afin qu'elles ne dépendent pas du pouvoir exécutif ;
- viii) En veillant au respect strict du principe d'inamovibilité des magistrats du siège ;
- ix) En protégeant et en garantissant l'indépendance du système judiciaire en interdisant toute ingérence dans le fonctionnement de la justice par des autorités gouvernementales, des membres du parti au pouvoir ou par des membres des corps de défense et de sécurité, et en prenant des sanctions contre ceux qui influencent, ou cherchent à influencer, le fonctionnement de la justice ;
- x) En développant des programmes d'aide juridictionnelle pour les plus vulnérables ;
- xi) En renforçant les mécanismes de protection de victimes et de témoins, ainsi que leur efficacité, pour restaurer la confiance de la population et pour encourager les témoins à s'exprimer sans crainte pour leur sécurité ;

g) De mettre en place, en consultation avec les bénéficiaires, un programme de réparations des victimes des violations des droits de l'homme qui comprenne des réparations matérielles, symboliques, individuelles et collectives, et qui ne soit pas dépendant de la condamnation des auteurs ;

h) D'établir le fond étatique pour les victimes de torture prévu par la loi et en conformité avec l'Observation générale n° 4 de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, concernant le droit à réparation des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 5) ;

i) D'établir un fond pour l'indemnisation des victimes de détention arbitraire et illégale ;

- j) De réformer le secteur de la sécurité :
 - i) En s'assurant que des éléments extérieurs n'accomplissent pas des activités de défense ou de sécurité ;
 - ii) En délimitant clairement les rôles des différents corps de défense et de sécurité, en particulier du SNR ;
 - iii) En suspendant les membres des corps de défense et de sécurité suspectés d'être impliqués dans des violations des droits de l'homme jusqu'au terme des enquêtes et des procédures judiciaires ;
 - iv) En établissant des procédures strictes et transparentes de sélection qui intègrent des mécanismes de vérification des antécédents ;
 - v) En renforçant le contrôle civil et démocratique des corps de défense et de sécurité, en particulier du SNR ;
- k) De s'acquitter de ses obligations internationales de respecter, de protéger et de garantir les droits économiques et sociaux :
 - i) En élaborant et en mettant en œuvre les budgets de l'État de manière à utiliser au maximum les ressources disponibles pour assurer le respect des droits de l'homme à la population appauvrie par la crise politique, en particulier des droits à l'alimentation, à l'eau et à la santé, et pour développer des indicateurs désagrégés, y compris par genre, pour mieux informer ses politiques ;
 - ii) En entreprenant, en consultation avec les populations travaillant dans le secteur agricole, notamment les femmes, des réformes visant une meilleure protection des droits des femmes et une meilleure utilisation des terres pour l'agriculture, et en développant des perspectives de travail en dehors du secteur agricole ;
 - iii) En utilisant une approche fondée sur les droits de l'homme pour régler les conflits fonciers dont ceux touchant les personnes ayant fui le Burundi avant et après 2015 ;
 - iv) En mettant fin à toute considération politique dans les processus de recrutement au sein de l'administration publique, des sociétés publiques et des sociétés mixtes.

117. La Commission recommande aux partis politiques et aux groupes armés d'opposition de s'abstenir de toute attaque sur le territoire burundais et de tout discours appelant à la violence, et de s'engager dans la recherche d'une solution durable à la crise politique.

118. La Commission recommande à l'Union africaine de donner une place importante, dans sa recherche d'une solution durable à la crise au Burundi, au respect des droits de l'homme et au rejet de l'impunité, tels que prévus par son Acte constitutif.

119. La Commission recommande aux partenaires techniques et financiers du Burundi :

- a) De suspendre ou de maintenir la suspension de toute aide budgétaire directe au Gouvernement en l'absence de priorisation des ressources internes en faveur des objectifs de développement durable et des droits économiques et sociaux de la population, et de mesures effectives contre la corruption ;
- b) De cibler les dons et les financements attribués au Gouvernement sur des projets en faveur des besoins de la population et de s'assurer que ceux-ci sont gérés efficacement et de manière transparente ;
- c) D'évaluer régulièrement l'impact des sanctions financières sur la population burundaise.

120. La Commission recommande aux garants de l'Accord d'Arusha, en leur qualité d'acteurs engagés en faveur d'une paix durable au Burundi, de continuer à chercher une solution pérenne à la crise politique et des droits de l'homme qui préserve et garantit les acquis de l'Accord d'Arusha.

Version anglaise

121. The Commission recommends that the Government of Burundi take the following measures as a matter of priority:

- (a) Put an immediate end to the gross human rights violations being committed by agents of the State and Imbonerakure;
- (b) With the support of the international community, establish ad hoc mechanisms with a mandate to investigate human rights violations and to prosecute perpetrators of international crimes that are not being investigated by the International Criminal Court;
- (c) With the support of the international community, establish an independent body with a mandate to investigate the cases of disappearance reported since April 2015, locate potential mass graves, and exhume and identify the remains;
- (d) Take measures to ensure that victims of torture and women survivors of sexual violence have access to appropriate care, including free access to all sexual and reproductive health services and to psychological support;
- (e) Implement the Guidelines on Combating Sexual Violence and its Consequences in Africa adopted by the African Commission on Human and Peoples' Rights;
- (f) Control price increases, in particular by reviewing duty and tax increases that are undermining the population's right to an adequate standard of living and by abolishing contributions that disproportionately affect the poorest sectors;
- (g) Cooperate with international human rights mechanisms, in particular by:
 - (i) Resuming the practice of allowing special procedures mandate holders to conduct missions to Burundi;
 - (ii) Implementing the recommendations of the universal periodic review, treaty bodies and special procedures, including by establishing a national mechanism for reporting and follow-up.
- (h) Authorize the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to resume all its activities in Burundi without hindrance;
- (i) Sign and implement the memorandum of understanding with the African Union and permit the full deployment of the 100 human rights observers provided for therein.

122. For the medium and longer terms, the Commission also recommends that the Government of Burundi:

- (a) Amend the Organization Act of 8 March 2018 amending Act No. 01/03 of 24 January 2013 on the mandate, composition, organization and functioning of the National Communication Council with a view to ensuring the latter's independence;
- (b) Ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance;
- (c) Amend the Code of Criminal Procedure to align its provisions with international standards, in particular the provisions on time limits for police custody and on oversight of detention, night-time and warrantless searches, the *flagrante delicto* procedure and the offence of "undermining the internal security of the State", and provisions that grant de jure impunity to judges and to officers of the criminal investigation police (*police judiciaire*);
- (d) Put an end to arbitrary detention and improve conditions of detention by:
 - (i) Implementing the Guidelines on the Conditions of Arrest, Police Custody and Pre-Trial Detention in Africa adopted by the African Commission on Human and Peoples' Rights;

- (ii) Ensuring that detention is subject to oversight measures for assessing its legality and compatibility with human rights.

(e) In the absence of an independent and efficient judicial system, cooperate fully with the International Criminal Court in the investigation opened on 25 October 2017;

(f) Undertake an in-depth reform of the judicial system to ensure its independence, impartiality and effectiveness, including by:

- (i) Implementing the Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa adopted by the African Commission on Human and Peoples' Rights;
- (ii) Publishing the conclusions of the national forum on the justice system held in 2013 and convening a meeting of justice-sector stakeholders and international partners to discuss follow-up action;
- (iii) Increasing the budget for the justice sector and ensuring that it is managed autonomously;
- (iv) Raising the pay levels of judges in the ordinary courts and increasing the resources and facilities available to them;
- (v) Computerizing court registries;
- (vi) Reviewing the composition of the Judicial Service Commission to ensure that the majority of its members are appointed by their peers;
- (vii) Reviewing procedures for the appointment, assignment, evaluation and promotion of judges to ensure that such procedures are not dependent on the executive branch;
- (viii) Ensuring strict observance of the principle that judges should have security of tenure;
- (ix) Protecting and safeguarding the independence of the judiciary by prohibiting any interference in the administration of justice by government authorities, members of the ruling party or members of the defence and security forces, and imposing penalties on anyone who influences or seeks to influence the administration of justice;
- (x) Developing legal aid programmes for persons belonging to the most vulnerable groups;
- (xi) Strengthening victim and witness protection mechanisms and improving their effectiveness in order to restore public trust and encourage witnesses to come forward without fear for their safety.

(g) In consultation with the beneficiaries, establish a reparations programme for victims of human rights violations, ensuring that material, symbolic, individual and collective reparations are made available regardless of whether or not the perpetrators are convicted;

(h) Establish the State fund for victims of torture provided for by law, in conformity with general comment No. 4 on the African Charter on Human and Peoples' Rights, adopted by the African Commission on Human and Peoples' Rights, concerning the right to redress for victims of torture and other cruel, inhuman or degrading punishment or treatment (art. 5);

(i) Establish a compensation fund for victims of arbitrary and unlawful detention;

(j) Reform the security sector by:

- (i) Ensuring that outsiders are not involved in defence or security activities;
- (ii) Clearly defining the roles of the various defence and security forces, in particular the National Intelligence Service;

- (iii) Suspending members of the defence and security forces who are suspected of involvement in human rights violations until the relevant investigations and judicial proceedings have concluded;
- (iv) Establishing rigorous and transparent selection procedures that include vetting mechanisms;
- (v) Strengthening democratic civilian control over the defence and security forces, in particular the National Intelligence Service.

(k) Meet its international obligations to respect, protect and fulfil economic and social rights by:

- (i) Developing and implementing State budgets in such a way as to maximize the use of available resources to ensure that the human rights of the sectors impoverished by the political crisis are respected, in particular the rights to food, water and health care, and to develop indicators disaggregated by factors such as gender in order to better inform its policies;
- (ii) In consultation with population groups working in the agricultural sector, including women, undertaking reforms with the aim of better protecting women's rights and making better use of land for agriculture, and developing employment opportunities outside the agricultural sector;
- (iii) Taking a rights-based approach to the settlement of land conflicts, including those involving persons who fled Burundi either before or after 2015;
- (iv) Ending the inclusion of any political considerations in hiring processes for the civil service, State enterprises and public-private enterprises.

123. The Commission recommends that political parties and armed opposition groups refrain from engaging in any attacks on Burundian territory and from any speech calling for violence, and that they join the effort to find a lasting solution to the political crisis.

124. The Commission recommends that the African Union, in its efforts to find a lasting solution to the crisis in Burundi, give priority to respect for human rights and the rejection of impunity, as provided for in its Constitutive Act.

125. The Commission recommends that the technical and financial partners of Burundi:

(a) Suspend, or maintain the suspension of, any direct budget support to the Government until such time as priority is given to the allocation of domestic resources for the fulfilment of the Sustainable Development Goals and the economic and social rights of the population, and effective measures are taken against corruption;

(b) Ensure that grants and financing provided to the Government are earmarked for projects to meet the population's needs, and ensure that such funding is managed effectively and transparently;

(c) Regularly evaluate the impact of financial sanctions on the people of Burundi.

126. The Commission recommends that the guarantors of the Arusha Agreement, in their capacity as committed proponents of a lasting peace in Burundi, continue to seek a durable solution to the political and human rights crisis that will preserve and safeguard the achievements of the Arusha Agreement.

3. Recommandations faites en 2017

Version française

1. Aux autorités burundaises

127. De mettre immédiatement un terme aux violations graves des droits de l'homme commises par des agents de l'État et des Imbonerakure sur lesquels l'État exerce un contrôle ;

128. D'enquêter sur ces violations et s'assurer que les auteurs présumés soient jugés dans les meilleurs délais, dans des procédures crédibles, indépendantes et équitables, et que les victimes obtiennent une juste réparation. Dans le cas où les auteurs présumés sont des agents de l'État, les suspendre jusqu'au terme de l'enquête et de la procédure judiciaire;

129. De prendre des mesures concrètes pour une amélioration rapide de la situation des droits de l'homme, notamment en :

- Annulant les mandats d'arrêt contre des dirigeants de médias, d'organisations de la société civile et de partis politiques qui n'ont pas utilisé ou prôné la violence, et permettant leur retour en toute sécurité au Burundi ;
- Levant la suspension et la radiation des médias et organisations de la société civile, leur permettant de reprendre leurs activités en toute indépendance, et revoyant les lois adoptées en 2017 sur les organisations non-gouvernementales burundaises et internationales ;
- Libérant immédiatement tous les prisonniers politiques ;
- S'assurant que toute personne arrêtée soit détenue dans un lieu de détention officiel et que des observateurs nationaux et internationaux soient autorisés à leur rendre visite ;
- Veillant à ce que les officiers de police judiciaire ne soient pas habilités à mener des perquisitions sans mandat et de nuit comme envisagé dans les projets d'amendement du Code pénal et du Code de procédure pénale ;
- S'assurant que des individus qui n'y sont pas légalement habilités, en particulier des Imbonerakure, ne conduisent pas des activités de maintien de l'ordre ou n'y prennent pas part, y compris dans des lieux de détention, et qu'ils ne portent pas des uniformes militaires ou de police ou ne soient pas en possession d'armes ;
- Poursuivant les auteurs de discours haineux ou appelant à la violence ;
- Mettant fin aux menaces, intimidations et actes d'extorsion par des agents de l'État et des Imbonerakure ;
- Permettant aux victimes de violences sexuelles et de torture d'avoir accès à des services médicaux et psychosociaux ;

130. D'engager une réforme en profondeur du système judiciaire, notamment en :

- Publiant les conclusions des états généraux de la justice qui se sont tenus en 2013 à Gitega ;
- Revoyant la composition du Conseil national de la magistrature afin que ses membres soient en majorité désignés par leurs pairs ;
- Revoyant les procédures de nomination, d'affectation, de notation et d'avancement des magistrats afin qu'elles ne dépendent pas du pouvoir exécutif ;
- Veillant au respect strict du principe d'inamovibilité des magistrats du siège ;
- Protégeant et garantissant l'indépendance du système judiciaire en interdisant toute ingérence dans le fonctionnement de la justice par des autorités gouvernementales, des membres du parti au pouvoir ou des membres des corps de défense et de sécurité, et en prenant des sanctions contre ceux qui influencent, ou cherchent à influencer, le fonctionnement de la justice ;

- Développant des programmes d'aide juridictionnelle pour les plus vulnérables ;
- Renforçant les mécanismes de protection de victimes et de témoins, ainsi que leur efficacité, pour restaurer la confiance de la population et encourager les témoins à s'exprimer sans crainte pour leur sécurité ;

131. De s'assurer que les membres des corps de défense et de sécurité respectent les droits de l'homme en toutes circonstances et servent les intérêts de la population dans son ensemble et pas uniquement ceux du parti au pouvoir, notamment en :

- Renforçant le contrôle civil des corps de défense et de sécurité et l'indépendance des organes chargés de ce contrôle créés par la Constitution, en particulier le Parlement, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et l'Ombudsman ;
- Remédiant à la carence constitutionnelle de contrôle civil du SNR ;
- Prenant des mesures pour vérifier les antécédents, notamment en matière de droits de l'homme, des agents des corps de défense et de sécurité et intégrant ces mesures à une refonte des procédures de recrutement et d'avancement de ces agents ;

132. De revenir sur sa décision de se retirer du Statut de Rome et coopérer pleinement avec la CPI dans la procédure d'examen préliminaire en cours et, si une enquête est ouverte, poursuivre cette coopération et assurer la protection des victimes et témoins ;

133. D'autoriser le HCDH à reprendre ses activités de documentation des violations des droits de l'homme au Burundi, suspendues depuis octobre 2016 ;

134. De signer et mettre en œuvre le mémorandum d'entente avec l'Union africaine et permettre le déploiement complet des 100 observateurs des droits de l'homme et des 100 experts militaires, décidé en 2016 ;

135. De coopérer avec les mécanismes des droits de l'homme des Nations Unies en accueillant à nouveau des missions des procédures spéciales et en mettant en œuvre les recommandations récentes des organes de traité ;

136. De s'engager activement dans la voie d'une résolution durable de la crise politique, notamment dans le cadre d'initiatives de dialogue engagées au niveau international.

2. *Aux partis politiques et groupes armés d'opposition*

137. De mettre immédiatement un terme aux atteintes aux droits de l'homme et aux actes de violence commis par leurs membres ;

138. De s'abstenir de tout discours appelant à la violence et s'engager dans la recherche d'une solution durable à la crise politique au Burundi.

3. *Au Conseil des droits de l'homme*

139. De prolonger le mandat de la Commission pour une durée d'un an aux fins d'approfondir et de poursuivre ses enquêtes en raison de la persistance des violations graves des droits de l'homme et des atteintes à ceux-ci et en l'absence d'autres mécanismes spécifiques en mesure de mener des enquêtes indépendantes et approfondies sur la situation des droits de l'homme au Burundi ;

140. De demander au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme de faire un rapport sur l'évolution de sa coopération avec le Gouvernement du Burundi aux prochaines sessions du Conseil.

4. *À la Cour pénale internationale*

141. D'ouvrir dans les plus brefs délais une enquête sur les crimes commis au Burundi au vu des conclusions contenues dans le présent rapport et d'autres informations à sa disposition.

5. *Au Conseil de sécurité des Nations Unies*

142. De prendre dûment compte des présentes conclusions de la Commission et de la persistance de violations graves des droits de l'homme dans toute discussion sur le Burundi et, dans ce contexte, de veiller à la mise en œuvre effective de la résolution 2303 (2016) ;

143. De saisir la CPI de tout crime de droit international qui serait commis au Burundi après le 27 octobre 2017 ;

144. De prendre des sanctions individuelles contre les principaux auteurs présumés de violations graves des droits de l'homme et de crimes de droit international au Burundi.

6. *Au Secrétaire général des Nations Unies*

145. De veiller à ce que le respect des droits de l'homme et la restauration de l'État de droit soient parmi les priorités de son Envoyé spécial sur le Burundi ;

146. De veiller à ce qu'aucun auteur présumé de violations des droits de l'homme ou de crimes de droit international au Burundi ne soit recruté dans des missions de maintien de la paix des Nations Unies.

7. *Aux États Membres des Nations Unies*

147. D'accorder *prima facie* le statut de réfugié aux demandeurs d'asile burundais et de veiller au respect strict du principe de non-refoulement, ainsi qu'à la protection des réfugiés ;

148. De poursuivre, au titre de la compétence universelle, les auteurs présumés de crimes de droit international commis au Burundi se trouvant sur leur territoire ;

149. De maintenir, en l'absence de toute amélioration de la situation des droits de l'homme dans le pays, les sanctions individuelles et la suspension de l'aide directe au Gouvernement burundais ;

150. De fournir une assistance technique aux autorités burundaises, dans la mesure où ces dernières font preuve d'une véritable volonté politique, afin de mener des enquêtes crédibles et indépendantes, notamment en matière d'autopsie, d'exhumation et d'identification des corps ;

151. De soutenir la mise en place de services médicaux et psychosociaux spécialisés, notamment pour les victimes de torture et de violences sexuelles ;

152. De soutenir les autorités burundaises, si celles-ci font preuve d'une véritable volonté politique, dans tout effort de réforme du système judiciaire et du secteur de sécurité qu'elles voudront engager aux fins d'améliorer la situation des droits de l'homme.

8. *À l'Union africaine*

153. De reprendre l'initiative dans la recherche d'une solution durable à la crise au Burundi fondée sur le respect des droits de l'homme et le rejet de l'impunité, tels que prévus par son Acte constitutif, et s'y engager activement ;

154. De veiller à ce qu'aucun agent de l'État burundais accusé de violations des droits de l'homme ou de crimes de droit international ne soit recruté dans des missions de maintien de la paix de l'Union africaine ;

155. De s'assurer que l'équipe complète de ses observateurs des droits de l'homme et experts militaires soit rapidement déployée au Burundi ;

156. D'envisager, en cas de persistance de la situation actuelle au Burundi, l'application de l'article 4 h) de son Acte constitutif, autorisant l'Union africaine à intervenir dans un État membre dans certaines circonstances, notamment en cas de crimes contre l'humanité.

9. *À la Communauté des États d'Afrique de l'Est*

157. De s'assurer que l'amélioration rapide de la situation des droits de l'homme soit une priorité dans ses efforts de médiation.

10. *Aux garants de l'Accords d'Arusha de 2000, en leur qualité d'acteurs engagés en faveur d'une paix durable au Burundi*

158. De se réunir le plus rapidement possible en vue de trouver une solution pérenne à la crise politique et des droits de l'homme au Burundi.

Version anglaise

1. *The Burundian authorities should:*

159. Put an immediate end to the gross human rights violations being committed by agents of the State and Imbonerakure over which the State exercises control;

160. Investigate these violations, ensure that the alleged perpetrators are prosecuted promptly in accordance with credible, independent and fair procedures, and that the victims obtain just reparation, and, where the alleged perpetrators are agents of the State, suspend them from their duties pending the completion of the investigation and the judicial proceedings;

161. Take practical measures to bring about a rapid improvement of the human rights situation, in particular by:

- Withdrawing the warrants for the arrest of heads of media outlets, civil society organizations and political parties who have neither used nor advocated violence, and permitting their safe return to Burundi;
- Lifting the suspension and reversing the revocation of the licences of media and civil society organizations, permitting them to resume their activities with complete independence and reviewing the laws adopted in 2017 concerning non-profit organizations and foreign non-governmental organizations;
- Immediately releasing all political prisoners;
- Ensuring that every person arrested is detained in an official place of detention and that national and international observers are allowed to visit them;
- Ensure that criminal investigation officers (officiers de police judiciaire) are not authorized to conduct searches without a warrant, including at night, as envisaged in the draft amendments to the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure;
- Ensuring that individuals lacking legal authorization, particularly the Imbonerakure, do not perform or participate in law enforcement activities, including in places of detention, and do not wear military or police uniforms or possess weapons;
- Prosecuting individuals who incite hatred or violence;
- Putting an end to threats, intimidation and acts of extortion by State officials and the Imbonerakure;
- Giving victims of sexual violence and torture access to medical and psychosocial services.

162. Undertake a thorough reform of the judiciary, in particular by:

- Publishing the conclusions of the General Convention on the Judiciary (États généraux de la justice) held in Gitega in 2013;
- Reviewing the composition of the Superior Council of Magistrates (Conseil supérieur de la magistrature) so that the majority of its members are designated by their peers;
- Reviewing the nomination, posting, evaluation and promotion procedures of magistrates so that they do not depend of the executive;
- Ensuring the respect of the principle of security of tenure for judges;
- Protecting and guaranteeing the independence of the judiciary by prohibiting all interference in their functions by governmental authorities, members of the ruling

party or security and defence forces, and imposing sanctions on those who influence, or seek to influence, the functioning of the judiciary;

- Developing legal aid programmes for the most vulnerable;
- Reinforcing the protection mechanisms for victims and witnesses, as well as their efficiency, in order to restore people's confidence in the system and to encourage witnesses to testify without fear for their security.

163. Ensure that members of the defence and security forces respect human rights in all circumstances and serve the interests of the population as a whole, not solely those of the ruling party, in particular by:

- Reinforcing civilian control over the military and the independence of the competent organs created by the Constitution to supervise this control, in particular the Parliament, the National Human Rights Commission and the Ombudsman;
- Implementing civilian control over the National Intelligence Service (Service national de renseignement) in line with the Constitution;
- Conducting background checks, in particular on human rights, on defense and security forces and incorporating these measures into reforms of the recruitment and career progression of these agents.

164. Reconsider their decision to withdraw from the Rome Statute, cooperate fully with the International Criminal Court in the ongoing preliminary examination and, if an investigation is initiated, continue that cooperation, inter alia by ensuring the protection of victims and witnesses;

165. Authorize the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to resume its documentation of human rights violations in Burundi, which has been suspended since October 2016;

166. Sign and implement the memorandum of understanding with the African Union and permit the full deployment of 100 human rights observers and 100 military experts that was decided upon in 2016;

167. Cooperate with United Nations human rights mechanisms by once again receiving special procedures missions and implementing the recent recommendations of treaty bodies;

168. Actively seek a lasting solution to the political crisis, inter alia through international initiatives to promote dialogue.

2. *Political parties and armed opposition groups should:*

169. Put an immediate end to human rights abuses and acts of violence committed by their members;

170. Refrain from any incitement of violence and participate in the quest for a lasting solution to the political crisis in Burundi.

3. *The Human Rights Council should:*

171. Extend the Commission's mandate for a period of one year to enable it to conduct further and more thorough investigations in view of the persistence of gross human rights violations and abuses and the absence of other specific mechanisms capable of undertaking independent and thorough investigations into the human rights situation in Burundi;

172. Request the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to report, at the forthcoming sessions of the Council, on the development of its cooperation with the Burundian Government.

4. *The International Criminal Court should:*

173. Initiate, as soon as possible, an investigation into the crimes committed in Burundi in light of the conclusions contained in the present report and other information at its disposal.

5. *The United Nations Security Council should:*

174. Take due account of the Commission's conclusions, as well as persistence of gross violations of human rights, in any discussion on Burundi and, in this context, ensure the effective implementation of resolution 2303 (2016);

175. Refer to the International Criminal Court any international crime that might be committed in Burundi after 27 October 2017;

176. Impose individual sanctions against the principal alleged perpetrators of gross human rights violations and international crimes in Burundi.

6. *The Secretary-General of the United Nations should:*

177. Ensure that respect for human rights and restoration of the rule of law are among the priorities of his Special Envoy for Burundi;

178. Ensure that no alleged perpetrator of human rights violations or international crimes in Burundi is recruited for United Nations peacekeeping missions.

7. *The States Members of the United Nations should:*

179. Grant prima facie refugee status to Burundian asylum seekers and ensure strict respect for the principle of non-refoulement and refugee protection;

180. Prosecute, in accordance with the principle of universal jurisdiction, alleged perpetrators of international crimes committed in Burundi who are found to be in their territory;

181. Maintain, in the absence of any improvement in the human rights situation in Burundi, the individual sanctions and the suspension of direct aid to the Government;

182. Provide technical assistance inter alia in respect to autopsies, exhumations and identification of bodies, to enable the Burundian to conduct credible and independent investigations;

183. Support the establishment of specialized medical and psychosocial services, especially for victims of torture and sexual violence;

184. Support Burundian authorities in any judicial and security sector reform endeavors that they might wish to undertake in order to improve the human rights situation.

8. *The African Union should:*

185. Retake the lead in seeking a lasting solution to the crisis in Burundi based on respect for human rights and rejection of impunity, as provided for in its Constitutive Act, and play an active role in that process;

186. Ensure that no agent of the Burundian State who is accused of human rights violations or international crimes is recruited for African Union peacekeeping missions;

187. Ensure that the full complement of African Union human rights observers and military experts is deployed rapidly in Burundi;

188. Consider, in the event that the current situation in Burundi persists, the application of Article 4 (h) of the Constitutive Act of the African Union, under which it is authorized to intervene in a member State in certain circumstances, particularly in the event of crimes against humanity.

9. *The East African Community should:*

189. Ensure that a rapid improvement of the human rights situation is a priority in its mediation efforts.

10. *The guarantors of the 2000 Arusha Agreement, in their capacity as committed proponents of a lasting peace in Burundi, should:*

190. Meet with a view to finding a lasting solution to the political and human rights crisis in Burundi.

Annexe IV

Indicateurs des facteurs de risque communs identifiés dans le Cadre d'analyse des atrocités criminelles (A/70/741-S/2016/71)

Version française

Facteur de risque 1. Situations de conflit armé ou autres formes d'instabilité

- a) Conflit armé international ou non international ;
- b) Crise sécuritaire provoquée, entre autres, par la dénonciation d'accords de paix, un conflit armé dans les pays voisins, des menaces d'interventions étrangères ou des actes de terrorisme ;
- c) Crise ou urgence humanitaire, pouvant être causée notamment par une catastrophe naturelle ou une épidémie ;
- d) Instabilité politique provoquée par un changement de régime ou un transfert de pouvoir soudain ou irrégulier ;
- e) Instabilité politique provoquée par des luttes de pouvoir ou la montée en puissance de mouvements d'opposition nationalistes, armés ou radicaux ;
- f) Tension politique provoquée par des régimes autocratiques ou une lourde répression politique ;
- g) Instabilité économique provoquée par une pénurie de ressources ou des différends concernant leur utilisation ou leur exploitation ;
- h) Instabilité économique provoquée par une crise grave de l'économie nationale ;
- i) Instabilité économique provoquée par la misère, un chômage de masse ou de profondes inégalités horizontales ;
- j) Instabilité sociale provoquée par une résistance à l'autorité de l'État ou à ses politiques ou par des protestations de masse contre celles-ci ;
- k) Instabilité sociale provoquée par l'exclusion ou des tensions fondées sur des questions d'identité, leur perception ou leurs formes extrémistes.

Facteur de risque 2. Antécédents de violations graves du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire

- a) Restrictions ou violations graves, passées ou actuelles, des droits consacrés par le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire, surtout si elles sont caractérisées par un comportement systématique observé préalablement et si elles visent des groupes, populations ou personnes protégés ;
- b) Actes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre ou incitation à les commettre, survenus dans le passé ;
- c) Politique ou pratique d'impunité ou de tolérance à l'égard de violations graves du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire, d'atrocités criminelles ou de l'incitation à les commettre ;
- d) Inaction, réticence à utiliser ou refus d'utiliser tous les moyens possibles pour faire cesser des violations graves prévues, prévisibles ou persistantes du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire ou des atrocités criminelles probables, ou incitation à les commettre ;

e) Maintien d'une aide à des groupes accusés de participer à des violations graves du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire, notamment des atrocités criminelles, ou non-condamnation de leurs actes ;

f) Justification de violations graves du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire ou d'atrocités criminelles, rapports partiels les concernant ou refus de les reconnaître ;

g) Absence de processus de réconciliation ou de justice transitionnelle après un conflit, ou politisation de ce processus ;

h) Méfiance généralisée envers les institutions de l'État ou entre différents groupes en raison de l'impunité.

Facteur de risque 3. Faiblesse des structures de l'État

a) Cadre juridique national n'offrant pas une protection suffisante et efficace, notamment par la ratification et l'incorporation dans le droit interne des instruments relatifs au droit international des droits de l'homme et au droit international humanitaire ;

b) Manque de ressources au sein des institutions nationales, en particulier les institutions judiciaires et celles chargées de l'application des lois et de la protection des droits de l'homme, et manque de représentation adéquate ou de formation ;

c) Absence de justice indépendante et impartiale ;

d) Absence de contrôle civil efficace des forces de sécurité ;

e) Niveaux élevés de corruption ou mauvaise gouvernance ;

f) Absence ou insuffisance de mécanismes externes ou internes de contrôle et de responsabilité, notamment que les victimes peuvent saisir pour demander réparation ;

g) Manque de sensibilisation et de formation des forces militaires, des forces irrégulières, des groupes armés non étatiques et des autres acteurs concernés au droit international des droits de l'homme et au droit international humanitaire ;

h) Manque de capacité de vérifier que les moyens et méthodes de guerre sont conformes aux normes du droit international humanitaire ;

i) Manque de moyens pour la réforme ou le renforcement des institutions, notamment par une aide régionale ou internationale ;

j) Ressources insuffisantes pour mettre en œuvre des mesures globales de protection des populations.

Facteur de risque 4. Motivations ou incitations

a) Motivations politiques, en particulier celles visant l'acquisition ou la consolidation du pouvoir ;

b) Intérêts économiques, notamment ceux fondés sur la préservation et le bien-être des élites ou de groupes d'identité, ou sur le contrôle de la répartition des ressources ;

c) Intérêts stratégiques ou militaires, notamment ceux fondés sur la protection ou la saisie de territoires et de ressources ;

d) Autres intérêts, notamment ceux visant à rendre une zone homogène dans son identité ;

e) Menaces réelles ou perçues comme telles de groupes, populations ou personnes protégés contre les intérêts ou les objectifs des auteurs d'actes criminels, notamment l'impression de déloyauté envers une cause ;

f) Appartenance ou adhésion réelle ou perçue comme telle de groupes, populations ou personnes protégés à des groupes d'opposition armés ;

- g) Idéologies fondées sur la suprématie d'une certaine identité ou sur des versions extrémistes de l'identité ;
- h) Politisation de griefs, de tensions ou de cas d'impunité issus du passé ;
- i) Traumatisme social provoqué par des situations de violence passées auxquelles il n'a pas été donné de suite satisfaisante et qui ont engendré des sentiments de perte, de déplacement et d'injustice et un désir possible de revanche.

Facteur de risque 5. Capacité de commettre des atrocités criminelles

- a) Disponibilité de personnel et d'armes et munitions ou de moyens financiers publics ou privés permettant de les acquérir;
- b) Capacité de transporter et déployer du personnel et de transporter et distribuer des armes et des munitions;
- c) Capacité d'encourager ou de recruter de nombreux partisans au sein de populations ou de groupes et disponibilité de moyens pour les mobiliser;
- d) Solide culture d'obéissance à l'autorité et de conformité au groupe;
- e) Présence d'autres forces armées ou de groupes armés non étatiques ou existence de liens avec de tels forces ou groupes;
- f) Présence d'acteurs commerciaux ou d'entreprises pouvant jouer un rôle déterminant en fournissant des biens, des services ou d'autres formes d'appui pratique ou technique contribuant à soutenir les auteurs;
- g) Appui financier, politique ou autre d'acteurs nationaux influents ou riches;
- h) Appui armé, financier, logistique ou autre, notamment sous la forme d'entraînement, fourni par des acteurs extérieurs, notamment des États, des organisations internationales ou régionales ou des entreprises privées.

Facteur de risque 6. Absence de facteurs atténuants

- a) Insuffisance ou absence de processus d'autonomisation, de ressources, d'alliés ou d'autres éléments qui pourraient contribuer à la capacité des groupes, populations ou personnes protégés de se protéger eux-mêmes;
- b) Absence de société civile nationale solide, organisée et représentative et de médias nationaux libres, diversifiés et indépendants;
- c) Absence d'intérêt et d'attention des acteurs de la société civile internationale ou d'accès aux médias internationaux;
- d) Absence ou présence limitée des Nations Unies, d'organisations non gouvernementales internationales ou d'autres acteurs internationaux ou régionaux dans le pays ayant accès aux populations;
- e) Absence d'adhésion ou de participation effective de l'État à des organisations internationales ou régionales établissant des obligations afférentes au statut de membre;
- f) Manque de contact, d'ouverture ou de relations politiques ou économiques avec d'autres États ou organisations;
- g) Coopération limitée de l'État avec les mécanismes internationaux et régionaux des droits de l'homme;
- h) Manque de volonté des parties à un conflit d'engager un dialogue, de faire des concessions et de solliciter l'appui de la communauté internationale, ou absence d'incitations à le faire;
- i) Réticence ou échec des États Membres de l'Organisation des Nations Unies ou des organisations internationales ou régionales à aider un État à assumer sa responsabilité de protéger ses populations contre les atrocités criminelles, ou à agir lorsque l'État n'assume manifestement pas cette responsabilité, ou indifférence à cet égard;

j) Manque de soutien des États voisins pour ce qui est de protéger les populations à risque en quête de refuge : fermeture des frontières, rapatriement forcé ou restrictions en matière d'aide;

k) Absence de mécanisme d'alerte rapide permettant de prévenir des atrocités criminelles.

Facteur de risque 7. Circonstances propices ou action préparatoire restreignant les droits fondamentaux

a) Suspension d'institutions vitales de l'État ou ingérence dans ces institutions, ou mesures provoquant des modifications de leur composition ou l'équilibre des pouvoirs, en particulier s'il en résulte l'exclusion ou une sous-représentation de groupes protégés ;

b) Renforcement de l'appareil de sécurité, réorganisation ou mobilisation de celui-ci contre des groupes, populations ou personnes protégés ;

c) Acquisition de grandes quantités d'armes et de munitions ou d'autres objets pouvant être utilisés pour causer des dommages ;

d) Création de milices ou de groupes paramilitaires, ou intensification de l'appui à de tels milices ou groupes ;

e) Imposition d'un contrôle strict sur l'utilisation des moyens de communication ou interdiction d'y avoir accès ;

f) Expulsion ou refus d'autoriser la présence d'organisations non gouvernementales, d'organisations internationales, de médias ou d'autres acteurs pertinents ou imposition de lourdes restrictions à leurs services et déplacements ;

g) Augmentation du nombre de violations du droit à la vie, de l'intégrité physique, de la liberté ou de la sécurité de membres de groupes, populations ou personnes protégés, ou adoption récente de mesures ou de lois qui leur portent atteinte ou constituent une discrimination délibérée envers eux ;

h) Augmentation du nombre d'actes de violence graves contre les femmes et les enfants ou création de conditions facilitant la commission d'agressions sexuelles contre eux, notamment comme instrument de terreur ;

i) Imposition de conditions de vie délétères ou déportation, appréhension, regroupement, ségrégation, évacuation, déplacement ou transfert forcés de groupes, populations ou individus protégés vers des camps, des zones rurales, des ghettos ou d'autres lieux désignés ;

j) Destruction ou pillage de biens ou d'installations essentiels à des groupes, populations ou personnes protégés, ou de biens liés à l'identité culturelle et religieuse ;

k) Marquage de personnes ou de leurs biens au motif de leur appartenance à un groupe ;

l) Politisation accrue de l'identité, d'événements du passé ou de motifs de se livrer à la violence ;

m) Augmentation du nombre de déclarations provocatrices, de campagnes de propagande ou d'incitations à la haine visant des groupes, populations ou personnes protégés.

Facteur de risque 8. Facteurs déclencheurs

a) Déploiement soudain de forces de sécurité ou déclenchement d'hostilités armées ;

b) Débordement de conflits armés ou graves tensions dans les pays voisins ;

c) Mesures prises par la communauté internationale, perçues par un État comme menaçant sa souveraineté ;

- d) Changements de régime, transferts de pouvoir ou modifications du pouvoir politique des groupes, survenant soudainement ou irrégulièrement ;
- e) Atteintes à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté ou à la sécurité de dirigeants, de personnalités éminentes ou de membres de groupes opposés ; autres actes de violence graves, notamment attentats terroristes ;
- f) Manifestations religieuses ou actes réels ou perçus comme tels d'intolérance religieuse ou d'irrespect, notamment en dehors des frontières nationales ;
- g) Actes d'incitation ou propagande haineuse visant des groupes ou des personnes particulières ;
- h) Recensement, élections, activités essentielles liées à ces processus ou mesures qui les déstabilisent ;
- i) Changements soudains affectant l'économie ou la population active, résultant notamment de crises financières, de catastrophes naturelles ou d'épidémies ;
- j) Découverte de ressources naturelles ou lancement de projets d'exploitation ayant de graves incidences sur les moyens de subsistance et la viabilité de groupes ou de populations civiles ;
- k) Commémoration de crimes du passé ou d'épisodes traumatiques ou historiques pouvant exacerber les tensions entre groupes, notamment la glorification d'auteurs d'atrocités ;
- l) Actes liés aux processus d'établissement des responsabilités, en particulier s'ils sont perçus comme injustes.

Version anglaise

Risk factor 1. Situations of armed conflict or other forms of instability

- (a) International or non-international armed conflict;
- (b) Security crisis caused by, among other factors, defection from peace agreements, armed conflict in neighboring countries, threats of external interventions or acts of terrorism;
- (c) Humanitarian crisis or emergency, including those caused by natural disasters or epidemics;
- (d) Political instability caused by abrupt or irregular regime change or transfer of power;
- (e) Political instability caused by disputes over power or growing nationalist, armed or radical opposition movements;
- (f) Political tension caused by autocratic regimes or severe political repression;
- (g) Economic instability caused by scarcity of resources or disputes over their use or exploitation;
- (h) Economic instability caused by severe crisis in the national economy;
- (i) Economic instability caused by acute poverty, mass unemployment or deep horizontal inequalities;
- (j) Social instability caused by resistance to, or mass protests against, State authority or policies;
- (k) Social instability caused by exclusion or tensions based on identity issues, their perception or extremist forms.

Risk factor 2. Record of serious violations of international human rights and humanitarian law

- (a) Past or present serious restrictions to or violations of international human rights and humanitarian law, particularly if assuming an early pattern of conduct and if targeting protected groups, populations or individuals;
- (b) Past acts of genocide, crimes against humanity, war crimes or their incitement;
- (c) Policy or practice of impunity for or tolerance of serious violations of international human rights and humanitarian law, of atrocity crimes, or of their incitement;
- (d) Inaction, reluctance or refusal to use all possible means to stop planned, predictable or ongoing serious violations of international human rights and humanitarian law or likely atrocity crimes, or their incitement;
- (e) Continuation of support to groups accused of involvement in serious violations of international human rights and humanitarian law, including atrocity crimes, or failure to condemn their actions;
- (f) Justification, biased accounts or denial of serious violations of international human rights and humanitarian law or atrocity crimes;
- (g) Politicization or absence of reconciliation or transitional justice processes following conflict;
- (h) Widespread.

Risk factor 3. Weakness of State structures

- (a) National legal framework that does not offer ample and effective protection, including through ratification and domestication of relevant international human rights and humanitarian law treaties;
- (b) National institutions, particularly judicial, law enforcement and human rights institutions that lack sufficient resources, adequate representation or training;
- (c) Lack of an independent and impartial judiciary;
- (d) Lack of effective civilian control of security forces;
- (e) High levels of corruption or poor governance;
- (f) Absence or inadequate external or internal mechanisms of oversight and accountability, including those where victims can seek recourse for their claims;
- (g) Lack of awareness of and training on international human rights and humanitarian law to military forces, irregular forces and non-State armed groups, or other relevant actors;
- (h) Lack of capacity to ensure that means and methods of warfare comply with international humanitarian law standards;
- (i) Lack of resources for reform or institution-building, including through regional or international support;
- (j) Insufficient resources to implement overall measures aimed at protecting populations.

Risk factor 4. Motives or incentives

- (a) Political motives, particularly those aimed at the attainment or consolidation of power;
- (b) Economic interests, including those based on the safeguard and well-being of elites or identity groups, or control over the distribution of resources;
- (c) Strategic or military interests, including those based on protection or seizure of territory and resources;

- (d) Other interests, including those aimed at rendering an area homogeneous in its identity;
- (e) Real or perceived threats posed by protected groups, populations or individuals against interests or objectives of perpetrators, including perceptions of disloyalty to a cause;
- (f) Real or perceived membership of or support for armed opposition groups by protected groups, populations or individuals;
- (g) Ideologies based on the supremacy of a certain identity or on extremist versions of identity;
- (h) Politicization of past grievances, tensions or impunity;
- (i) Social trauma caused by past incidents of violence not adequately addressed and that produced feelings of loss, displacement, injustice and a possible desire for revenge.

Risk factor 5. Capacity to commit atrocity crimes

- (a) Availability of personnel and of arms and ammunition, or of the financial resources, public or private, for their procurement;
- (b) Capacity to transport and deploy personnel and to transport and distribute arms and ammunition;
- (c) Capacity to encourage or recruit large numbers of supporters from populations or groups, and availability of the means to mobilize them;
- (d) Strong culture of obedience to authority and group conformity;
- (e) Presence of or links with other armed forces or with non-State armed groups;
- (f) Presence of commercial actors or companies that can serve as enablers by providing goods, services, or other forms of practical or technical support that help to sustain perpetrators;
- (g) Financial, political or other support of influential or wealthy national actors;
- (h) Armed, financial, logistic, training or other support of external actors, including States, international or regional organizations, private companies, or others.

Risk factor 6. Absence of mitigating factors

- (a) Limited or lack of empowerment processes, resources, allies or other elements that could contribute to the ability of protected groups, populations or individuals to protect themselves;
- (b) Lack of a strong, organized and representative national civil society and of a free, diverse and independent national media;
- (c) Lack of interest and focus of international civil society actors or of access to international media;
- (d) Lack of, or limited presence of, the United Nations, international non-governmental organizations or other international or regional actors in the country and with access to populations;
- (e) Lack of membership and effective participation of the State in international or regional organizations that establish mandatory membership obligations;
- (f) Lack of exposure, openness or establishment of political or economic relations with other States or organizations;
- (g) Limited cooperation of the State with international and regional human rights mechanisms;
- (h) Lack of incentives or willingness of parties to a conflict to engage in dialogue, make concessions and receive support from the international community;

(i) Lack of interest, reluctance or failure of States Members of the United Nations or members of international or regional organizations to support a State to exercise its responsibility to protect populations from atrocity crimes, or to take action when the State manifestly fails that responsibility;

(j) Lack of support by neighbouring States to protect populations at risk and in need of refuge, including by closure of borders, forced repatriation or aid restriction;

(k) Lack of an early warning mechanism relevant to the prevention of atrocity crimes.

Risk factor 7. Enabling circumstances or preparatory action

(a) Imposition of emergency laws or extraordinary security measures that erode fundamental rights;

(b) Suspension of or interference with vital State institutions, or measures that result in changes in their composition or balance of power, particularly if this results in the exclusion or lack of representation of protected groups;

(c) Strengthening of the security apparatus, its reorganization or mobilization against protected groups, populations or individuals;

(d) Acquisition of large quantities of arms and ammunition or of other objects that could be used to inflict harm;

(e) Creation of, or increased support to, militia or paramilitary groups;

(f) Imposition of strict control on the use of communication channels, or banning access to them;

(g) Expulsion or refusal to allow the presence of non-governmental organizations, international organizations, media or other relevant actors, or imposition of severe restrictions on their services and movements;

(h) Increased violations of the right to life, physical integrity, liberty or security of members of protected groups, populations or individuals, or recent adoption of measures or legislation that affect or deliberately discriminate against them;

(i) Increased serious acts of violence against women and children, or creation of conditions that facilitate acts of sexual violence against those groups, including as a tool of terror;

(j) Imposition of life-threatening living conditions or the deportation, seizure, collection, segregation, evacuation or forced displacement or transfer of protected groups, populations or individuals to camps, rural areas, ghettos or other assigned locations;

(k) Destruction or plundering of essential goods or installations for protected groups, populations or individuals, or of property related to cultural and religious identity;

(l) Marking of people or their property based on affiliation to a group;

(m) Increased politicization of identity, past events or motives to engage in violence;

(n) Increased inflammatory rhetoric, propaganda campaigns or hate speech targeting protected groups, populations or individuals.

Risk factor 8. Triggering factors

(a) Sudden deployment of security forces or commencement of armed hostilities;

(b) Spillover of armed conflicts or serious tensions in neighbouring countries;

(c) Measures taken by the international community perceived as threatening to a State's sovereignty;

(d) Abrupt or irregular regime changes, transfers of power, or changes in political power of groups;

(e) Attacks against the life, physical integrity, liberty or security of leaders, prominent individuals or members of opposing groups; other serious acts of violence, such as terrorist attacks;

(f) Religious events or real or perceived acts of religious intolerance or disrespect, including outside national borders;

(g) Acts of incitement or hate propaganda targeting particular groups or individuals;

(h) Census, elections, pivotal activities related to those processes, or measures that destabilize them;

(i) Sudden changes that affect the economy or the workforce, including as a result of financial crises, natural disasters or epidemics;

(j) Discovery of natural resources or launching of exploitation projects that have a serious impact on the livelihoods and sustainability of groups or civilian populations;

(k) Commemoration events of past crimes or of traumatic or historical episodes that can exacerbate tensions between groups, including the glorification of perpetrators of atrocities;

Acts related to accountability processes, particularly when perceived as unfair.
